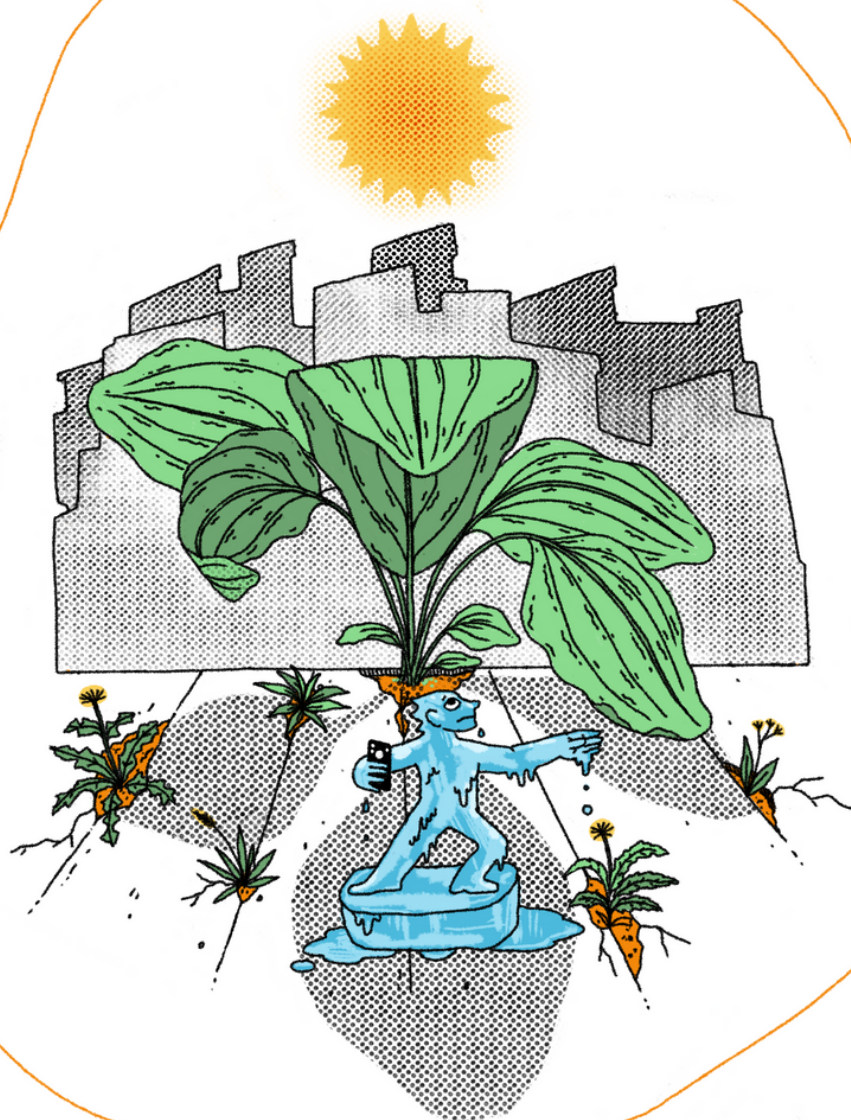


UNA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN CENTRO CIUDADANO DE ESTUDIOS PARA
UNA SOCIEDAD ABIERTA

SINERGIAS



Edición N°4, 2025

Revista Sinergias N°4, año 2025

Editor

Juan Pablo Sáenz Bonilla

Diagramación

ACCESA

Ilustraciones

Laura Astorga Monestel



Revista **sinergias**

Un proyecto de ACCESA



accesa.org



info@accesa.org

Contenidos

04 **Presentación**

05 **Carta del Editor**

07 **Mensaje Visual**

08 **Sección especial: 10 años de ACCESA**

09 • ACCESA, el cambio y lo fugaz bajo el sol

13 • Para colorear

14 **Rutas Abiertas: espacio de reflexión y propuestas**

15 • Limitaciones a la democracia en El Salvador y cómo enfrentarlas

18 • Las políticas penitenciarias en América Latina: Un desafío para la democracia y la convivencia social

22 • Memoria democrática en contextos de desaparición de personas en México

24 • Más allá de la desinformación

27 • Reprobando las Fake News ¿Volver a la Escuela?

- 30 • Juventudes y democracia: el poder de la formación política
- 34 • Preámbulo y la idea de crear comunidad
- 36 • ¿Puede el seguimiento y evaluación de políticas públicas contribuir a la democracia?
- 40 • ¿Por qué es importante reconocer al contrario?

43 **Entrevista colectiva**

53 **Entrevistas a profundidad**

- 54 • Entrevista con Tarick Gracida
- 58 • Entrevista con Thai Jungpanich

61 **Personas colaboradoras**

Presentación

En noviembre de 2024, ACCESA cumplió diez años de existencia. Una década de trabajo continuo como organización de la sociedad civil, comprometida con la promoción de la apertura democrática en Costa Rica y América Latina.

Nuestro propósito ha sido claro: contribuir a la construcción de una sociedad abierta, entendida como una sociedad democrática, humanista, inclusiva, plural, diversa y orientada al bien común.

Una sociedad en la que los derechos de todas las personas puedan realizarse plenamente. Para ello, nos hemos dedicado a desarrollar investigaciones rigurosas, herramientas innovadoras y acciones de incidencia política a nivel local y nacional.

Estos diez años han estado marcados por aprendizajes, desafíos y profundas transformaciones. También atravesamos una pérdida profunda: el fallecimiento de nuestro querido compañero y cofundador, Manfred Vargas. Su visión y compromiso siguen marcando nuestro camino.

Agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones e instituciones que han acompañado este recorrido, que han creído en nuestra propuesta y han contribuido, de múltiples formas, a hacerla realidad. Expresamos también nuestro agradecimiento a quienes hicieron posible esta nueva edición de Sinergias.

Esperamos que esta edición despierte preguntas, genere conversaciones necesarias y contribuya a tejer nuevas alianzas que sostengan el trabajo para avanzar hacia una sociedad más justa, abierta, democrática y participativa.

Daniela Chacón Mendoza
Presidenta de ACCESA

Carta del Editor

En nuestra vida cotidiana salimos de nuestras casas, atravesamos nuestros jardines -quienes aún tienen esa dicha- y llegamos a la calle. En el camino nos encontramos con múltiples plantas, ramas y flores, de esas que ya casi no reconocemos ni podemos nombrar.

Aunque con ciertas dificultades, todavía podemos identificar las chinias, las orquídeas o los jades. Más silenciosas y menos valoradas, muchas veces creciendo entre las piedras y el humo de la ciudad, crecen otras plantas que deslegitimamos con nombres como malas hierbas o (mal)ezas. También, existen las que llamamos plantas de grieta que logran crecer aún en espacios reducidos y limitados como los adoquines maltrechos de San José, en las aceras o en las paredes de las casas.

A pesar de su usual descrédito, estas plantas también realizan sus aportes. Atraen polinizadores, ofrecen refugio a diversas especies, adornan nuestros paisajes, algunas son alimenticias o medicinales y hasta funcionan como juguetes en nuestra época de infancia: ¿Quién no recuerda la alegría que producía jugar con las famosas “dormilonas” y verlas despertar y reposar?

De manera similar, en nuestro día a día, nos despertamos, revisamos nuestras redes sociales, leemos algunas noticias y llegamos a la calle. Ahí nos enfrascamos en las presas, nos quejamos de la corrupción, sufrimos la delincuencia y la desigualdad que la ha ocasionado. Además, durante el día conversamos con nuestras amigas y compañeros sobre el fin de semana, el fútbol, la política y acerca del avance de proyectos políticos autoritarios, o bien, de aquellos que con sus acciones debilitan las instituciones democráticas.

En esos momentos, surgen sentimientos de preocupación y malestar que hacen que a veces nos sintamos como plantas de grieta, desarrollándonos en contextos que podrían ser mejores y más libres sin tanta represión y limitación.

Ahí, sin pensarlo mucho, creamos simpatías con aquellas plantas silenciosas y menos valoradas. Ellas, enfrentan la presión del concreto que resiste su exposición y nosotros(as) afrontamos el peso político de gobiernos con gestos autoritarios y patriarcales que ponen en riesgo nuestras libertades y derechos.

En esas ocasiones la simpatía por las malas hierbas y las (mal)ezas nos puede llevar a aprender de ellas: echar raíces fuertes en el suelo, ceñirse a las bases que las sostienen, unir cimientos con otras plantas, absorber de la superficie para poder crecer, aguantar el clima desfavorable y los días de recorte, es decir, resistir.

En ese paralelismo, como ciudadanos(as) también podemos afianzarnos a los principios democráticos, organizarnos con otras personas y grupos, impregnarnos de otras herramientas, enfrentar las condiciones sociopolíticas adversas, en síntesis: también resistir.

Así lo han hecho muchas personas, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en Latinoamérica que, a pesar de los embates políticos, han resistido. Han sido plantas de grieta creciendo aún en terrenos hostiles para la participación política democrática. La reacción no se ha hecho esperar pues aquellos gobernantes y regímenes que preferirían que no crecieran les han llamado “traidores de la patria”, “revoltosos”, “canallas”, es decir, malas hierbas y mal(ezas).

A pesar de esos calificativos, una y otra vez hemos aprendido de esas plantas, para hacer de su naturaleza, nuestra propia fuerza: seguir resistiendo aún en condiciones desfavorables o -peor aún- en las grietas y en el subsuelo.

Esta edición de *Sinergias* tiene el interés justamente de hablar de esas condiciones sociopolíticas que limitan la democracia y de poner la luz en algunas voces de la sociedad civil y la academia que en la región latinoamericana resisten los avances autoritarios.

A través de diversos artículos, se abordan temas que generan preocupación como las limitaciones a la democracia, la memoria en contextos de desaparición de personas, las políticas penitenciarias de “mano dura” y la desinformación, junto con debates acerca de la importancia democrática de la formación política, el seguimiento de políticas públicas, las tecnologías cívicas, la construcción de nuevas narrativas y el reconocimiento de los adversarios políticos.

Asimismo, se presentan experiencias de organizaciones sociales que promueven espacios alternativos de participación y de otras que se enfrentan a los retos de la cooperación internacional y el debilitamiento de la democracia.

Estas reflexiones se dan ciertamente en un contexto de preocupación por la democracia, pero también de celebración por algunas cosas buenas. Este es el caso del décimo aniversario de ACCESA, un espacio de malas hierbas y (mal)ezas que ha crecido, echado frutos y tratado de aportar a la profundización de la democracia costarricense. En esa trayectoria también ha llovido, ha pegado el sol (como dice el artículo de Ana Sofía Ruiz) y se han caído algunas hojas, ante lo cual ACCESA ha intentado resistir y hacer su contribución.

Entre esas hojas caídas contamos a Manfred Vargas, primer editor de *Sinergias*, un amigo y por supuesto una mala hierba. Sus semillas se siguen esparciendo y sus raíces aún se sienten. Sirva esta edición como un homenaje y celebración de su vida.

Juan Pablo Sáenz Bonilla¹
Editor de la Revista Sinergias

¹Agradezco a Laura Astorga Monestel, Silvia Astorga Monestel y al Solar de Eugenia por contarme más sobre las malas hierbas, las malezas, las plantas de grieta y las cimarronas.

Mensaje Visual

The background features a large, faint illustration within an orange circular border. At the top is a stylized sun with a dotted pattern. Below it, a person is depicted sitting on a large, light blue rock or pedestal. The person is surrounded by various green plants, including a large leafy plant on the left and several smaller plants with orange roots or tubers on the right. The entire scene is rendered in a soft, artistic style with a dotted texture.

Crece sin la intervención de nadie, tienen tamaños y formas muy variadas, algunas tienen flores vistosas, otras muy pequeñas, algunas mueren y renacen con las lluvias, otras crecen fuertes aún bajo el pesado sol del verano, todo esto sin la apreciación o cuidados de nadie.

Algunas son alimento o medicina, otras son ambas, como el llantén, presente en varios de los dibujos de esta edición, el cual es comestible y tiene múltiples propiedades medicinales.

Decidí darle importancia protagónica al llantén porque, así como ella, muchas otras plantas de grieta, mal llamadas "malezas" crecen frente a nuestros ojos, en medio del cemento, basura y nuestra falta de atención. Resisten, son necias con su belleza elemental, son diversas y fuertes, son refugio y alimento para otras formas de vida, pueden alimentarnos o curarnos.

Todas estas plantas son como la fuerza humana del mundo: personas trabajadoras, muchas explotadas, empobrecidas, vulnerabilizadas, invisibilizadas, que resisten a pesar de todo eso que se les impone, -a pesar del cemento- a pesar de, son quienes mueven, alimentan, educan, curan, construyen, visten e incluso producen algunos lujos para los pocos más poderosos del planeta. También son quienes sostienen la gran mesa mundial, a pesar de las condiciones, a pesar del pesar. Esa resistencia tendrá un límite, como tiene un límite el cemento que se agrieta, que cede el paso a las raíces de una planta que nadie observa. Esas grietas acumulan otras materias orgánicas que eventualmente seguirán carcomiendo el cemento, para dar paso a otras plantas de grieta, o a las personas que sostienen el mundo.

Laura Astorga Monestel
Ilustradora

**Sección
Especial:
10 años de
ACCESA**

ACCESA, el cambio y lo fugaz bajo el sol

Ana Sofía Ruiz Schmidt



Y coincidimos en el terral
el heladero con su carretilla averiada
y yo
que corría tras los pájaros huidos del fuego
de la zafra.
También coincidió el sol.
En esa situación cómo negarse a un favor llano:
el heladero me pidió cuidar su efímero hielo.
Oh cuidar lo fugaz bajo el sol...
El hielo empezó a derretirse
bajo mi sombra, tan desesperada
como inútil
Diluyéndose
dibujaba seres esbeltos y primordiales
que sólo un instante tenían firmeza
de cristal de cuarzo
y enseguida eran formas puras
como de montaña o planeta
que se devasta.
No se puede amar lo que tan rápido fuga.
Ama rápido, me dijo el sol.
Y así aprendí, en su ardiente y perverso reino,
a cumplir con la vida:
Yo soy el guardián del hielo.

“El guardián del hielo” (José Watanabe)

Conocí este poema hace poco más de diez años, en una época de grandes esperanzas e inspiración, no solo a nivel personal y profesional, sino también por el contexto que vivíamos. Costa Rica había elegido por primera vez a un partido distinto a los que gobernaron en el bipartidismo, impulsado por un anhelo profundo de cambio. Fue en ese mismo contexto que conocí a las personas que por esa época fundaron ACCESA.

El trayecto recorrido hasta ahora me hace pensar en el poema, porque si algo podemos afirmar con certeza es que todo cambia. En tiempos de incertidumbre y transformaciones aceleradas, podemos conseguir perspectiva mirando atrás. Estamos siendo testigos de cambios profundos en múltiples dimensiones, casi en tiempo real. La democracia no está exenta a estos cambios.

El poema de Watanabe nos describe cómo el hielo, en apariencia inmutable, realmente está en deshielo constante. Incluso, más poéticamente, podríamos pensar que tiene diferentes velocidades. Y que en cada instante puede producir imágenes hermosas, o desesperanzadoras en otras. Así ha cambiado el mundo, la región centroamericana y el país en la última década: hemos visto un debilitamiento del sistema democrático y de sus instituciones, el aumento de la polarización y el desgaste de la confianza ciudadana. Sin embargo, ACCESA ha permanecido constante, no solo como testigo del cambio, sino como un actor que se ha ajustado a los tiempos.

En estos años, hemos coincidido con ACCESA en procesos de participación ciudadana en compras públicas y, recientemente, en la investigación sobre la violencia de género facilitada por la tecnología. Vemos cada día cómo la tecnología transforma la manera en que las personas se informan y participan en la política. Aunque las redes sociales pueden propagar desinformación, también han abierto nuevas vías para la movilización social y la exigencia de rendición de cuentas. En otros momentos también ha creado fantasías de participación, como cuando nos hace creer que “hacer click” es participar. ACCESA ha sabido entrar en espacios complejos de diálogo, y entender que el compromiso de la participación es mucho más que un click: es estar presente en cuerpo, en voz y en hacer espacio para que otras voces puedan ser escuchadas; en ser capaz de disentir, de encontrarse con personas con experiencias diferentes y encontrar valor en ello.

*“si algo podemos afirmar con certeza es que todo cambia
[...] La democracia no está exenta a estos cambios. En
tiempos de incertidumbre y transformaciones aceleradas,
podemos conseguir perspectiva mirando atrás”*



La democracia, como esas esculturas de hielo, adopta formas que creemos sólidas, pero que requieren vigilancia y acción para evitar que se disuelvan sin darnos cuenta. Este año, ACCESA celebra una década de compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la gobernanza democrática en Costa Rica y la región. Resulta ahora una ocasión propicia para reflexionar sobre el camino recorrido y articularse con otras entidades para proyectar los desafíos del futuro. Si fuéramos el personaje del poema, ¿podríamos anticipar cómo impactará el deshielo? ¿Cuáles podrían ser sus consecuencias y cómo nos adaptamos a esas posibilidades?

Según el informe *El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023*, publicado por IDEA Internacional (2023), la calidad democrática en la región ha sufrido un preocupante deterioro. La erosión de las instituciones, el aumento de la desinformación y la pérdida de derechos civiles son tendencias alarmantes alrededor del mundo y sobre todo en nuestra región. A nivel global, algunos países han experimentado retrocesos en libertades civiles y derechos políticos, mientras que otros han logrado avances mediante reformas institucionales y movilización social. América Latina no es ajena a esta dinámica: las crisis democráticas generan incertidumbre, pero también pueden catalizar transformaciones positivas.

Las organizaciones de la sociedad civil funcionan como contrapesos del poder, crean espacios de diálogo, innovación y construcción de soluciones colectivas. Sus desafíos son complejos pues en este panorama de deterioro institucional, llegan a sustituir labores que el Estado ha abandonado. Por estas razones, su labor es crucial. En su trayectoria, ACCESA ha sido un puente entre la ciudadanía y las instituciones, promoviendo iniciativas para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la participación efectiva. En este panorama actual y hacia el futuro, ¿qué condiciones son necesarias para que organizaciones como ACCESA puedan continuar su trayectoria?

El proceso de transformación, como el deshielo, nunca va a estar acabado. Con la llegada del 2025, surgen nuevas preguntas. Las estructuras que han permitido que organizaciones como ACCESA participen en espacios de diálogo y toma de decisiones están en riesgo, no solo por aspectos financieros, sino también por razones políticas y la legitimidad de sus acciones.

*“La democracia,
como esas
esculturas de hielo,
adoptamos formas que
creemos sólidas,
pero que requieren
vigilancia y acción
para evitar que se
disuelvan sin
darnos cuenta.”*

En Costa Rica hemos sentido orgullo por nuestra democracia, pero es evidente el ataque que ha sufrido en los últimos años. La creciente desconfianza en las instituciones y la desconexión entre la ciudadanía y sus representantes son advertencias claras.

El futuro nos plantea muchos desafíos: adaptarnos a nuevas dinámicas políticas y fortalecer los mecanismos que permitan a la ciudadanía desempeñar un rol activo en la toma de decisiones. Las elecciones no solo definen gobiernos, sino que trazan el rumbo de las sociedades. El próximo año tendremos elecciones y será un momento para reflexionar como país respecto al futuro que queremos, la capacidad de disentir y de llegar a acuerdos.

La pregunta es si continuará por la senda del autoritarismo o reafirmará su tradición de vanguardia en la protección del ambiente y los derechos civiles. La historia nos ha demostrado que la democracia nunca está asegurada. Es una construcción constante que requiere compromiso y, sobre todo, participación activa.

La democracia no es perfecta, pero sigue siendo el mejor sistema que conocemos. No hay evidencia de una alternativa superior; al contrario, los intentos de debilitarla han llevado a retrocesos en libertades y derechos, como vemos cotidianamente en las noticias. Su fragilidad nos recuerda que debe ser defendida constantemente. Los avances no son permanentes, y sabemos que el proceso democrático nunca estará acabado. Las preguntas, entonces, son nuestras: ¿qué futuro queremos construir? ¿podremos y queremos seguir siendo los guardianes del hielo?

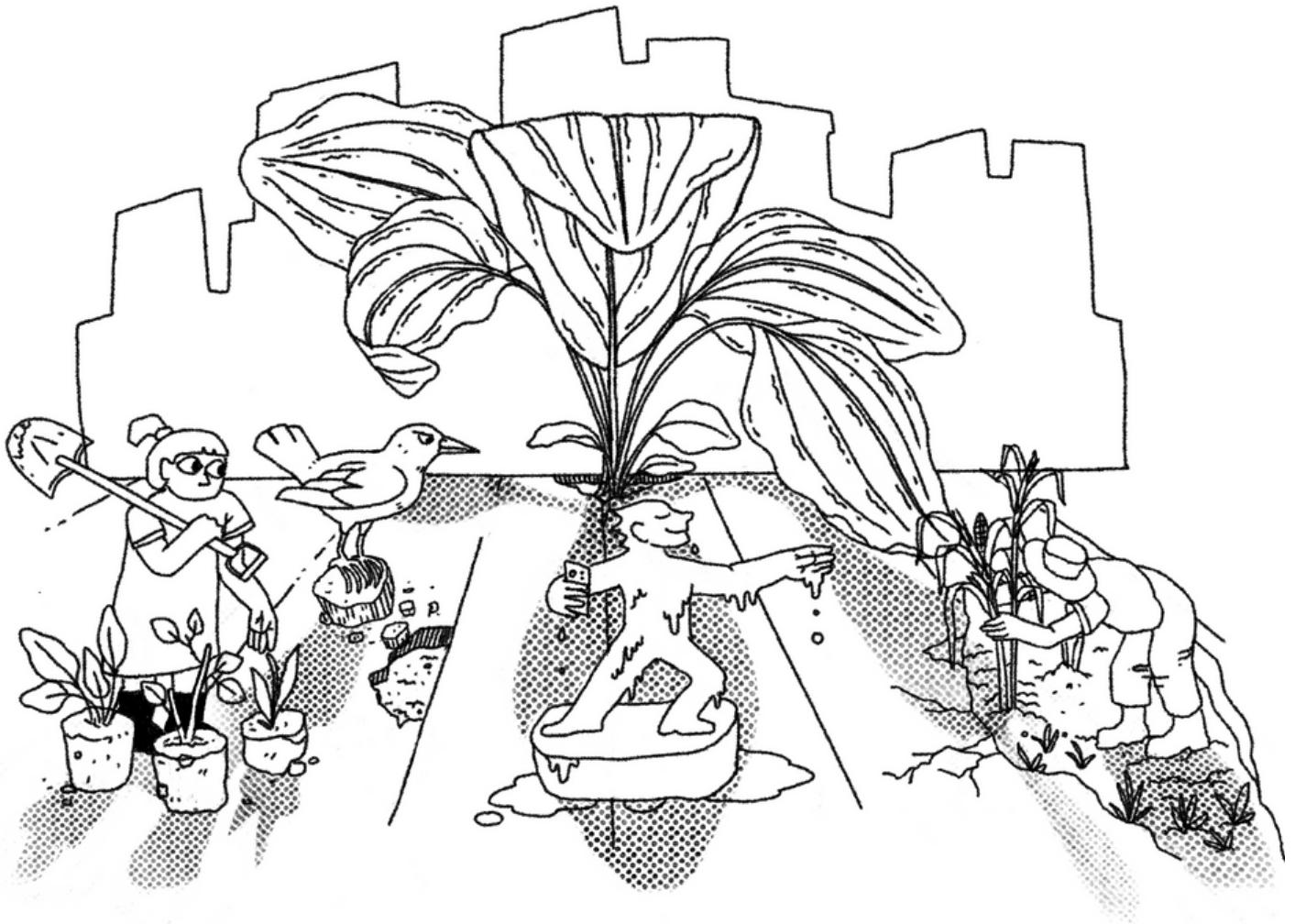


*“¿qué futuro queremos construir?
¿podremos y queremos seguir siendo los
guardianes del hielo?”*

Referencia

Instituto Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral. (2023). *El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023: Los nuevos pesos y contrapesos*. IDEA.
<https://www.idea.int/sites/default/files/2023-11/el-estado-de-la-democracia-en-el-mundo-y-las-americas-2023.pdf>

Para Colorear



**RUTAS
ABIERTAS:
ESPACIO DE
REFLEXIÓN Y
PROPUESTAS**

Limitaciones a la democracia en El Salvador y cómo enfrentarlas

Karen Estrada Romero

El primero de junio de 2019 llegó al poder Nayib Bukele, un joven anti-establishment que prometió un cambio en la forma de gobernar ante el descontento generalizado de la población que demandaba sacar a “los mismo de siempre” del gobierno, refiriéndose a los partidos tradicionales, ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), partido de derecha conservadora que gobernó durante cuatro periodos consecutivos y, al FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) que gobernó dos periodos consecutivos. Ninguno de los dos partidos pudo resolver, a percepción de la población, el problema de inseguridad encabezada por las maras y pandillas.

Nayib Bukele fue hábil en canalizar el malestar de la población ante la falta de solución ante sus problemas, logrando la presidencia en esa ocasión con el partido GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional). Bukele llegaría al poder, por primera vez, mediante el uso de las instituciones democráticas y las reglas del juego dentro de un marco legal en un estado de derecho vigente hasta entonces. Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas cambiarían.

La forma de gobierno de Bukele se ha ido consolidando en la restricción de derechos, basada en un populismo punitivo, encabezado por su política de seguridad, traducida en la aplicación del régimen de excepción, que ha estado vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Este régimen fue aplicado como una forma de política reactiva ante un problema estructural de seguridad, para desarticular el actuar de las maras y pandillas que estaban presentes en diversos territorios del país, pero que, significó también ignorar el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de circulación, el crecimiento de las fuerzas armadas tanto en recursos y funciones de seguridad civil, y propensión a prácticas de abuso policial, entre otras restricciones de derechos. Esto es importante mencionarlo pues el régimen de excepción, utilizado como política de seguridad permanente, ha dado pie al cambio de dinámicas que son anómalas dentro de un sistema democrático, y esto incluye haber tenido las primeras elecciones bajo este contexto.

En este sentido, las elecciones generales realizadas en El Salvador en el 2024 fueron un importante reto para el Tribunal Supremo Electoral, organismo de administración electoral en el país. Se realizaron, además, reformas electorales cercanas a la contienda electoral que impactarían de manera importante los procesos electorales. Una de estas reformas se aplicó al voto en el exterior asignando a la circunscripción de San Salvador, la capital del país y con la circunscripción más grande, a los electores que votarían en el exterior, además de implementar el voto electrónico en estos casos, el cual fue aplicado con procesos poco transparentes.

Otra de las reformas fue la derogación del Art. 291-A del Código Electoral, con lo que concedería al partido oficialista el poder realizar reformas electorales sin restricción temporal, es decir, incluso durante el periodo electoral. En la búsqueda de favorecer caudales electorales y centralización de recursos y de poder político, se realizó el cambio de circunscripciones municipales, la reducción del número de escaños en la Asamblea Legislativa y el cambio de la fórmula que convierte el número de votos en escaños pasando de una fórmula proporcional de Hare restos mayores a la D'hont que, en un sistema político como el salvadoreño, favorecería progresivamente la creación de un sistema político de partido único. A ello se sumaría la reelección presidencial permitida mediante la reinterpretación de Sala de lo Constitucional en la sentencia 1-2021.

Como ya se mencionó, es importante recalcar que estas reformas y las elecciones se dieron en un marco de régimen de excepción, escenario que no se vivía en el país desde los años setenta, en donde se forjaba un escenario restrictivo en libertades civiles y políticas que llevaron al conflicto armado durante la década de los ochenta e inicios de los noventa. Según el informe de observación la organización de sociedad civil Cristosal (2024a), en las semanas anteriores a las elecciones se dieron hechos como la presencia de retenes en comunidades históricamente organizadas y presencia militar en centros de votación, así como jornadas de detenciones en diversos territorios del país, por lo que la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en un marco de régimen de excepción en el periodo electoral creó un ambiente de temor en las comunidades.

Estas situaciones difícilmente generarían el desarrollo de elecciones libres y democráticas tanto en la jornada del 4 de febrero en las que se realizó la votación para la presidencia y diputaciones, como las del 3 de marzo dedicada a consejos municipales y Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Según el último informe de variedades de la democracia V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, El Salvador se encuentra en un régimen de autocracia electoral, lo que, a raíz de las condiciones de estas últimas elecciones podría cambiar en detrimento de un contexto democrático.

Asimismo, otro de los elementos relacionados con las comunidades es la implementación de políticas restrictivas para silenciar voces disidentes, acciones que se han ido evidenciando progresivamente desde la aplicación del régimen de excepción. Cristosal (2024b), en su reciente informe sobre la realidad del espacio cívico en el que se obtuvo información de 128 organizaciones de la sociedad civil, reporta vulneraciones como el miedo a organizarse, la censura y autocensura, el acoso físico digital o administrativo, el cierre de espacios, la estigmatización del trabajo organizado, la restricción de información, la división entre luchas sociales, la instrumentalización de la sociedad civil por parte del gobierno, la participación a puerta cerrada (es decir, en lugares con medidas de seguridad específicas para las personas organizadas) y recurrir a la movilidad humana a partir de estas restricciones. Dichas vulneraciones complican el trabajo de las organizaciones y, por ende, la defensa de sus causas.

Afrontar el contexto restrictivo

Anteriormente se han mencionado algunas de los elementos que constituyen limitaciones a la democracia en el contexto salvadoreño a partir de las políticas de seguridad del gobierno de Bukele. El presente artículo también tiene el reto de plantear cómo estas limitaciones pueden ser afrontadas. En este sentido, y ante un escenario encabezado por un líder con características progresivamente autocráticas, pero con una amplia popularidad, puede tornarse complejo. Sin embargo, se hace necesario el aprendizaje comparado y sostener que los mecanismos de organización de la sociedad ante la creciente restricción de derechos y debilitamiento democrático han sido esenciales.

En este sentido, se haría necesaria la implementación de mecanismos de articulación de los sectores organizados, la denuncia continua ante la comunidad internacional en búsqueda de un respaldo sustantivo, y la comunicación estratégica con la población en general. El recurrir a la solidaridad y la exigencia de la restitución de un Estado de derecho se vuelve cada vez más urgente, sin embargo, el fortalecimiento de redes de apoyo en el contexto nacional e internacional se hace imperativo en temas de denuncia y respaldo ante escenarios adversos. Volver a la exigencia de las libertades básicas que conforman un contexto democrático es urgente ante un escenario progresivamente autocrático, restrictivo de derechos y donde la disidencia se dificulta cada vez más. El acompañamiento a la ciudadanía es esencial y el fortalecimiento de la cultura democrática se vuelve un factor primordial en vías del resguardo de la democracia, su institucionalidad y las garantías fundamentales.

Referencias

Cristosal. (2024a). *Reporte: El Salvador en elecciones. Militarización y miedo.*

<https://cristosal.org/ES/elecciones-de-2024-en-el-salvador-coercion-intimidacion-y-detenciones-arbitrarias/>

Cristosal (2024b). *“Ver, oír y callar”. La nueva realidad del espacio cívico en El Salvador.*

<https://cristosal.org/ES/ver-oir-y-callar-la-nueva-realidad-del-espacio-civico-en-el-salvador/>

Nord, Marina; Lundstedt, Martin; Altman, David; Angiolillo, Fabio; Borella, Cecilia; Fernandes, Tiago; Gastaldi, Lisa; Good God, Ana; Natsika, Natalia, y Lindberg, Staffan. (2024). *Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot*. University of Gothenburg: V-Dem Institute.

Las políticas penitenciarias en América Latina: Un desafío para la democracia y la convivencia social

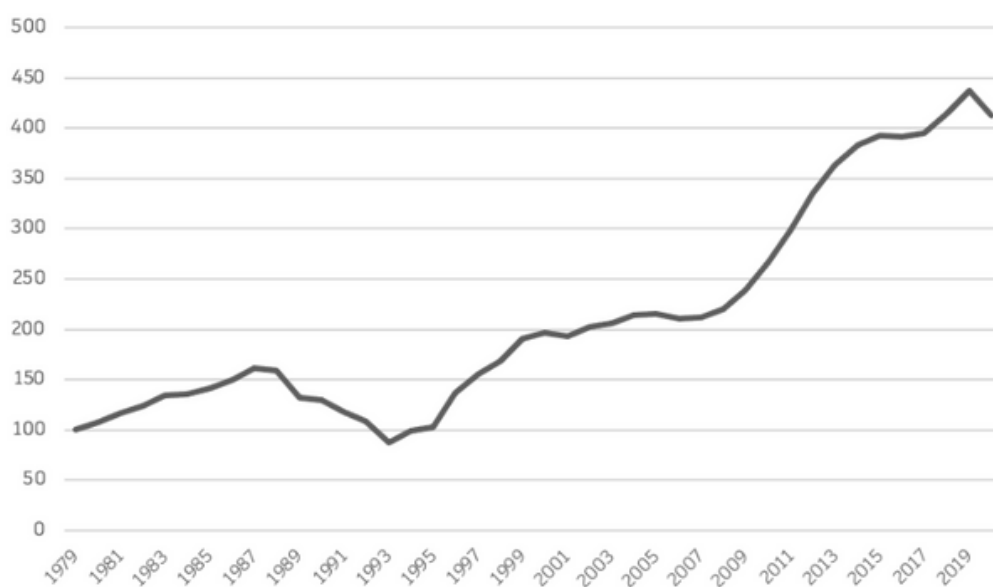
Jesús Bedoya Ureña

La región centroamericana se ha posicionado entre las zonas con mayor población penitenciaria relativa a nivel mundial. Según datos del *World Prison Brief*, países como El Salvador, Panamá y Costa Rica, junto con Cuba, encabezan esta lista en el contexto latinoamericano. Esta realidad no es casual ni puede reducirse a un simple problema de gestión carcelaria. En el fondo, refleja una tendencia sistemática donde la prisión se ha convertido en la respuesta predilecta desde los ámbitos legislativos para abordar problemas sociales que, por su naturaleza, requieren la reformulación de un modelo íntegro de bienestar social.

El caso de Costa Rica resulta particularmente ilustrativo para entender las contradicciones que caracterizan la política penitenciaria en la región. A finales de la década de 1970, el país se posicionó como líder regional en materia de derechos humanos con el establecimiento del Pacto de San José y la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos avances prometían una nueva era en el tratamiento de la justicia penal y los derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad tomó un rumbo diferente: mientras se buscaba humanizar el castigo y establecer medidas alternativas para la imposición de sanciones, el poder legislativo respondía a los problemas sociales creando normas que privilegiaban el encarcelamiento, ampliaban las penas y reducían los beneficios penitenciarios.

Un ejemplo elocuente fue la creación de los Tribunales de Flagrancia en Costa Rica en 2009. Esta reforma judicial, que en principio buscaba agilizar la administración de justicia, vino acompañada de otro tipo de consecuencias, las cuales, ciertamente, no garantizaron la solución del problema delictivo ni procuraron la seguridad que se prometía. La transformación de contravenciones en delitos, la reducción de los beneficios penitenciarios y el establecimiento de un tribunal específico para sancionar de manera expedita algunos de los delitos más comunes, propiciaron, al final del día, un notorio incremento de la población bajo custodia del Ministerio de Justicia y Paz (ver gráfico N°1). Este aumento en las responsabilidades del Ministerio no estuvo acompañado de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para atender en condiciones adecuadas a la población reclusa. Esto evidenció cómo un conjunto de soluciones, aparentemente técnicas, pueden exacerbar los problemas que pretenden resolver.

Gráfico N°1. Costa Rica: Tasa de población penitenciaria por cada cien mil habitantes. (1979-2020)



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Justicia y Paz e Instituto Nacional de Estadística y Censos

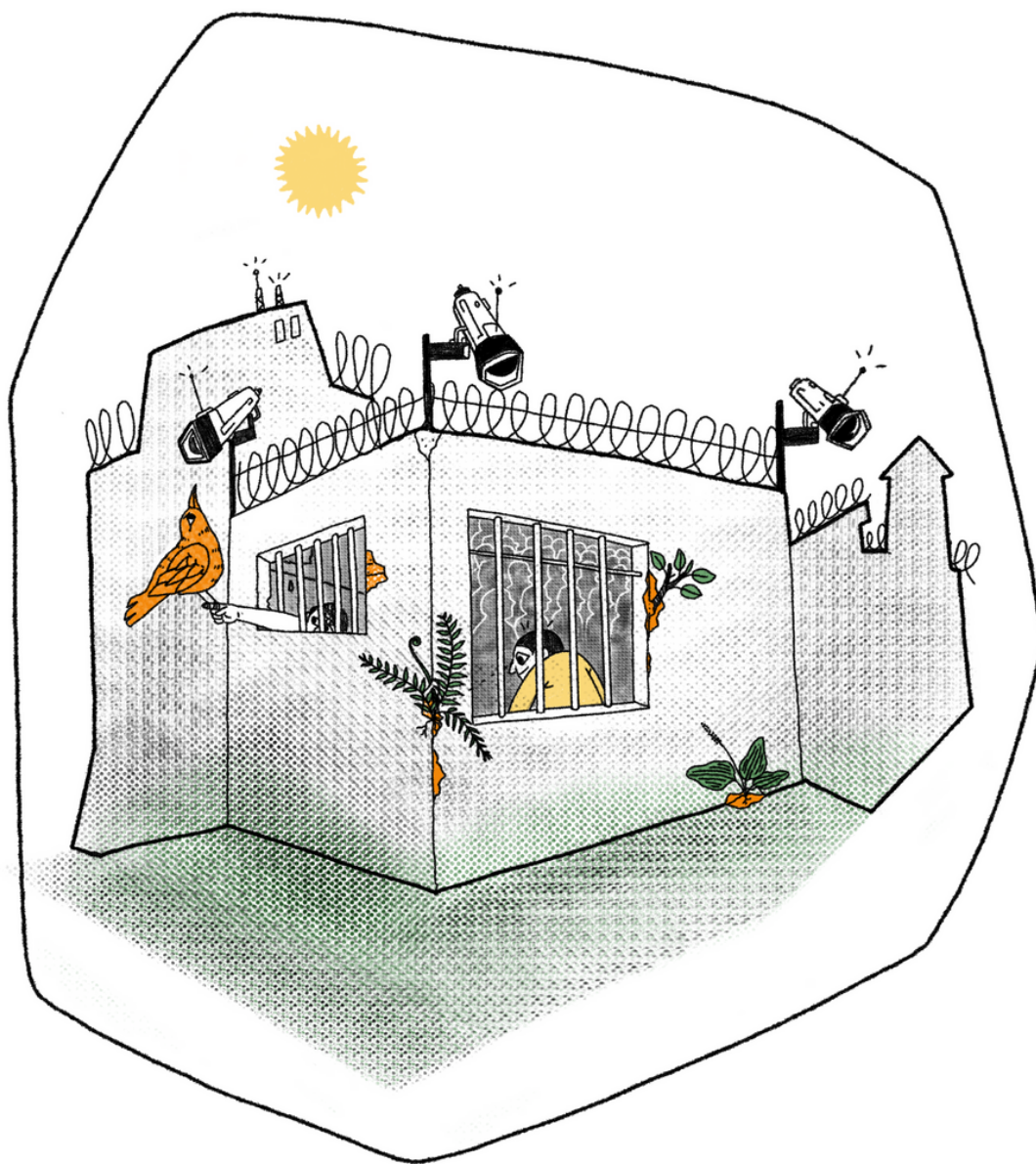
En la actualidad, el panorama regional se ha complicado con la popularidad de las políticas de “mano dura”, ejemplificadas notablemente por el caso de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Estas medidas han ganado apoyo —tanto entre la población civil como entre muchos gobernantes— al promover la idea de que el endurecimiento del castigo es la única solución viable para los conflictos sociales que aquejan a la región.

Aunque la ciudadanía salvadoreña hoy reporta una mayor sensación de seguridad, es posible asegurar que estas políticas no han colaborado a la reducción del conflicto social, sino que lo han transformado y agravado. Al sostener una polarización ciudadana entre “buenos” y “malos”, se propicia una tensión social por parte del Estado, que además actúa mediante la exclusión sistemática de sectores considerados sospechosos. Ello con el agravante de que tales medidas figuran sin un debido proceso judicial, debilitando en consecuencia las instituciones democráticas que garantizan la paz social, minando la confianza ciudadana y sentando las bases para una posible escalada futura del conflicto.

Costa Rica enfrenta hoy esta disyuntiva en un contexto particularmente desafiante. El país experimenta niveles sin precedentes de violencia, especialmente en su manifestación más letal. En 2023, el país alcanzó una tasa histórica de 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que 2024 se convirtió en el segundo año más violento de su historia, con 880 homicidios documentados. Ante esta realidad, las demandas ciudadanas por medidas de seguridad resultan comprensibles y justificadas. Sin embargo, insistir en el encarcelamiento masivo como solución única o principal, ignora la complejidad del problema y puede, paradójicamente, agravar las condiciones que generan la violencia.

Es posible atender cómo desde la década de 1990 las diputaciones costarricenses han venido acudiendo a la cárcel para mitigar cada nueva advertencia en relación con la inseguridad y la violencia. Sin embargo, el incremento sostenido de la población reclusa ha resultado a todas luces insuficiente y poco eficaz para atajar y resolver el problema. La realidad es que detrás de la escalada de violencia que aqueja hoy al país, existe una red intrincada de factores sociales, económicos e institucionales. El abandono de ciertas comunidades por parte del Estado, el debilitamiento progresivo de las políticas de bienestar social, la creciente desconfianza entre la ciudadanía, los altos niveles de desigualdad y marginación, junto con las crisis en los sistemas de salud y educación, son todos elementos que contribuyen a la situación actual. En este contexto, la cárcel se convierte en una medida superficial que, además de ser poco efectiva, distrae la atención y los recursos, que ya de por sí son escasos.

El desafío, por tanto, no radica simplemente en endurecer las penas o construir más prisiones, sino en desarrollar políticas de seguridad que sean verdaderamente democráticas y que se integren en una estrategia más amplia de desarrollo social y prevención del delito. Esto requiere abandonar las soluciones simplistas que, aunque hoy acallen las voces del temor y la frustración, mañana aparecerán inefectivas y contraproducentes. La tarea resulta desafiante, porque el problema de fondo lo es. Sin embargo, por esta misma razón es ineludible. Empezar por reconocer la complejidad del problema conlleva tomar medidas y establecer acciones claras sobre sus múltiples dimensiones. Esto supone que la relación entre Estado y sociedad civil será fundamental para hallar medidas adecuadas: contextualizadas en las realidades de los territorios, fundamentadas en problemas concretos y realistas en sus soluciones. Solo así podremos aspirar a construir sociedades más seguras sin sacrificar los principios democráticos que deben guiar nuestro desarrollo como país y región.



Memoria democrática en contextos de desaparición de personas en México

Yael Siman Druker

La pregunta sobre qué y cómo una sociedad recuerda el pasado violento es una cuestión fundamental. La creación de museos y memoriales, el establecimiento de monumentos y el re-nombramiento de calles son todas formas materiales sociales y culturales que expresan el intento por recordar y reparar los legados del pasado: racismo, xenofobia, violencia política y otras violencias. Las iniciativas de construcción de memoria pueden provenir del Estado o de actores no estatales como las organizaciones de la sociedad civil o los colectivos de familiares de víctimas.

Dado que estos esfuerzos por recordar el pasado evocan valores como el respeto a la otredad, la paz o la reconciliación, se les asocia comúnmente con la democracia. Distintos estudios examinan la relación compleja entre justicia transicional -en la que la memoria ocupa un lugar central- y democratización. Con respecto a ello, Jenny Wüstenberg señala que hay dos posturas teóricas principales. La primera destaca la importancia que tiene construir instituciones democráticas fuertes después del fin de un régimen autoritario lo cual requiere olvidar el pasado. La segunda consiste en establecer ciertas normas democráticas para lo cual es necesario confrontar el pasado, escuchar a las víctimas y recordar sus experiencias (2025, 28 de abril).

Sobre la construcción de una memoria democrática, J. Wüstenberg identifica cuatro tipos de memoria: a) memoria representativa o la que la mayoría piensa debe ser la manera de recordar el pasado -aun cuando puede llegar a ser una memoria selectiva-; b) memoria legítima o aquella construida por un régimen democrático -aun cuando puede llegar a omitir los episodios más traumáticos del pasado-; c) memoria normativa o aquella que narrativamente evoca valores democráticos como la tolerancia y la inclusión; y d) memoria cívica (2025, 28 de abril).

En el caso de México, donde la democracia es aún frágil y donde la violencia no cesa, en los últimos años han surgido una serie de iniciativas que podrían caracterizarse como parte de una memoria cívica dado que son producto de los esfuerzos de organizaciones sociales y de colectivos de víctimas. Un ejemplo de ello son los anti-monumentos los cuales nos confrontan con distintos episodios de violencia en el país: el incendio de la guardería ABC, los feminicidios y Ayotzinapa, entre otros. En un volumen colectivo reciente titulado, *Las luchas por la memoria. Contra las violencias en México*, se muestran varias de estas iniciativas de memorialización en el país frente a la desaparición de personas y otros crímenes (Alonso, Nienass, de los Ríos Merino y De Vecchi Gerli, 2023).

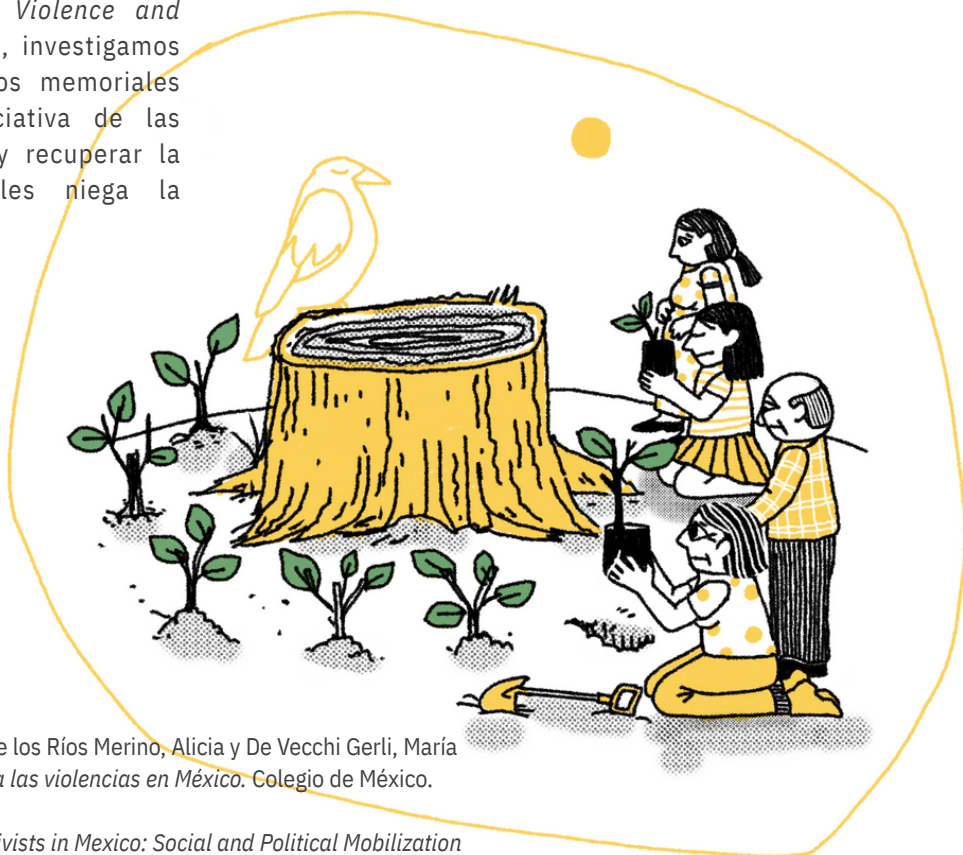
En México, la desaparición de personas sucedió a lo largo del siglo veinte. Sin embargo, en las últimas décadas, este crimen atroz aumentó de forma exponencial, ocurriendo en todo el país. La perpetración de esta forma de violencia extrema es contraria a la democracia porque se violan los derechos humanos más básicos de las personas - incluyendo a las víctimas y sus familias-, se atenta contra el sentido de seguridad que debiera proveer el Estado, provoca miedo generalizado y con ello se desmoviliza a la sociedad, además de que fractura el tejido social comunitario que permite la convivencia pacífica.

Frente a este fenómeno de desaparición, han surgido en México más de cien colectivos de familiares de víctimas que en algunos casos presionan al Estado para memorializar la ausencia de sus seres queridos desaparecidos especialmente ante la ausencia de verdad y justicia.

En el libro, *Victim Activists in Mexico: Social and Political Mobilization amid Extreme Violence and Disappearance* (Siman y Hone, 2024), investigamos cómo en estados como Veracruz, los memoriales locales -que son creados por iniciativa de las familias- buscan desafiar el olvido y recuperar la identidad de las víctimas que les niega la desaparición.

En la ciudad de Xalapa, por ejemplo, tomó seis años crear un memorial el cual fue finalmente inaugurado en 2023. Este memorial se encuentra en el parque Rafael Hernández Ochoa y tiene 50 fotografías de personas desaparecidas, aunque representa a muchas más. En la ciudad de Poza Rica se creó un memorial en el mismo año. Este memorial también está en un parque público, llamado Furberos. En éste, 30 rostros protegen una cruz blanca sobre una base de concreto. En el pedestal también aparece la frase que distingue a los colectivos de familiares en México: “¡Hasta Encontrarlos!”

Así es como formas concretas de recordación pública, como los memoriales, permiten a los familiares procesar su dolor y a la sociedad nos invitan a tomar conciencia ética, lo cual es también requisito fundamental de una memoria democrática y de una democracia vital.



Referencias

Alonso, Alexandra Délano; Nienass, Benjamin; de los Ríos Merino, Alicia y De Vecchi Gerli, María (Eds.). (2023). *Las luchas por la memoria. Contra las violencias en México*. Colegio de México.

Siman, Yael y Hone, Matthew. (2024). *Victim Activists in Mexico: Social and Political Mobilization amid Extreme Violence and Disappearance*. Lanham: Lexington Books.

Wüstenberg, Jenny (2025, 28 de abril). Memory and Democracy: A Complex Relationship. *Magazine of the European Observatory on Memories*.
<https://europeanmemories.net/magazine/memory-and-democracy-a-complex-relationship/>.

Más allá de la desinformación

Adrián Vergara Heidke

Desde la elección presidencial de Donald Trump y el referéndum por el *Brexit* en Inglaterra, ambas en el año 2016, las *fake news* y la desinformación se han transformado en temas recurrentes en las discusiones sobre comunicación política en medios y redes sociales. En muchas universidades y centros de pensamiento y de investigación no académicos se ha estudiado y reflexionado sobre estos temas y su impacto en la sociedad y, específicamente, en la política de los países. Por la importancia que tiene todo lo anterior en la actualidad, en las próximas líneas intentaremos brevemente desarrollar algunas ideas sobre lo que se ha hecho y dicho sobre las *fake news* y destacar los aspectos en los que debemos trabajar desde la ciudadanía y las instituciones.

Las noticias falsas o *fake news* en inglés son textos que circulan en plataformas digitales, principalmente, en redes sociales. Sin embargo, también se han creado páginas web y (supuestos) medios de comunicación digitales que publican y divulgan este tipo de textos. Las *fake news* se han visto como una amenaza a la estabilidad de las sociedades, ya que se les relaciona directamente con el ascenso de candidatos populistas, el respaldo a actores políticos antidemocráticos y la polarización política en la ciudadanía. Algunos ejemplos serían los casos de Trump en E.E.U.U., Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador o Rodrigo Chaves en Costa Rica. Durante sus campañas y gobiernos han proliferado las noticias falsas, por medio de cuentas en redes sociales y medios digitales fugaces, los cuales aparecen tan rápido como dejan de existir.

La preocupación por las *fake news* llegó a los centros de investigación, quienes han desarrollado estudios de diferentes dimensiones de estos textos. Hay investigaciones que se han centrado en las características textuales, por un lado, para entender qué elementos semióticos pueden lograr convencer a las personas de ciertas ideas falsas y, por otro lado, identificar sus características, con el fin de automatizar su reconocimiento.

Algunos resultados han sido el efecto de credibilidad en los lectores que tienen las fotografías de personas nombradas dentro de las noticias falsas y la posibilidad de reconocimiento automatizado solo de un pequeño número de estos textos, principalmente, los que responden a patrones textuales muy frecuentes y reutilizan imágenes que ya circulan en Internet.

Otras investigaciones han intentado abordar qué características de las personas hacen que crean y compartan estos textos por redes sociales. Algunos de los resultados a los que han llegado estos estudios ha sido que personas de grupos sociales con menores ingresos y niveles educativos más bajos, así como con ideologías conservadoras, son quienes serían más propensas a considerar verdadera la información falsa y reproducirla en redes sociales.

Si bien estas investigaciones han dado aportes al conocimiento y al trabajo para disminuir el impacto de las *fake news*, han asumido, de alguna manera, que este tipo de texto es nuevo y tiene un impacto importante en la política y la sociedad. Se les asigna una capacidad persuasiva que difícilmente hayan tenido otros textos en la historia. Sin embargo, la realidad es que otros textos de divulgación masiva con información falsa, engañosa o muy sesgada han circulado en distintos momentos en nuestras sociedades. Ejemplo de esto son los medios de comunicación con evidentes posicionamientos políticos, la propaganda política (como el caso de la propaganda nazi o la estadounidense durante la I Guerra Mundial) o la publicidad comercial. Entonces, ¿cuál es la novedad de las *fake news*?

La preocupación por las *fake news* surgió no solo de los grupos políticos que se pudieron ver perjudicados con ellas, sino también de los medios de comunicación tradicionales que vieron disminuir su impacto en la divulgación y reproducción de su construcción de la realidad y sus posicionamientos políticos, principalmente, en redes sociales. Los estudios y la crítica se han centrado en textos que aparentan ser textos periodísticos, es decir, que intentan imitar noticias, pero que su contenido es falso o sesgado. Su auge se debe a lo accesible que se volvieron las tecnologías para poder producir textos sin necesidad de un conocimiento especializado y a la facilidad para difundirlos en Internet.

Ahora bien, el principal problema es que la información falsa que afecta a la sociedad no solo circula como *fake news*, sino también en otros formatos: memes, *reels*, historias, declaraciones o conferencias de prensa de autoridades (presidentes, ministros y ministras, jerarcas de instituciones públicas y privadas...) o actores políticos. En otras palabras, la desinformación no solo es producto de noticias falsas, sino también de casi todo tipo de texto que circula por Internet y otros medios, incluso, de aseveraciones que realizan personas con capitales político y simbólico: que pueden cambiar las creencias o el conocimiento de otras personas desde sus puestos.

Esta proliferación de información falsa tiene las condiciones óptimas para circular y lograr sus objetivos. En primer lugar, la gran cantidad de información (no necesariamente falsa o muy sesgada) que recibimos a diario por redes sociales o está disponible en blogs y páginas web dificulta que podamos identificar cuáles son verdaderas y falsas. En segundo lugar, las empresas dueñas de redes sociales, buscadores, correos electrónicos y páginas web tienen información detallada de intereses, gustos, datos sociodemográficos, educación, entre otras, sobre las personas usuarias. Esta información les permite caracterizar a la ciudadanía y segmentarla para fines comerciales. Es así como se puede pagar para que, por ejemplo, una noticia falsa les llegue directamente a aquellas personas que cumplen con los criterios para creer en esa información falsa. Por último, el hecho de que los algoritmos de las empresas nos ofrezcan contenidos que concuerdan con nuestros gustos nos hace creer que la mayoría de las personas piensa o se interesa por lo mismo que nosotros. Esta situación provoca que las personas olvidemos o no nos demos cuenta que existen otras posiciones y realidades, por lo que nos costará distinguir entre falsa, sesgada o verdadera, especialmente, cuando la información puede ser similar a nuestra forma de ver el mundo.

¿Qué podemos hacer con la desinformación, en contextos sin marcos legales ni capacidad del Estado para actuar? Desde las instituciones públicas se considera fundamental hacer una transformación comunicacional, de manera que la ciudadanía tenga acceso a información actual clara y verídica. Esto implica cambios en los canales de comunicación institucional (creación de nuevos, modernización de viejos) y, especialmente, en la presentación de la información, es decir, se debe buscar la mayor claridad para lograr que sea comprensible para las personas destinatarias principales: la ciudadanía. Incluso, se puede pensar en que dentro de las funciones de instituciones contraloras se encuentre la dimensión de comunicación ciudadana y lenguaje claro. Todo esto tendría el fin de asegurar que las personas puedan acceder fácilmente a contenidos que verifiquen o desmientan información que esté circulando. Por otro lado, con resultados a largo plazo, debe desarrollarse un proyecto país de educación formal e informal para el desarrollo de las habilidades de comprensión crítica de textos multimedia (esto va más allá de la lectura tradicional), el cual debe ser adecuado a la realidad comunicativa actual.



¿Qué podemos hacer con la desinformación, en contextos sin marcos legales ni capacidad del Estado para actuar?

Reprobando las Fake News ¿Volver a la Escuela?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única libertad posible?

Eduardo Galeano-Escuela Patas Arriba.

Vivimos en tiempos de consumo y velocidad, donde la información ha influido en los dispositivos que usamos para leer y ver, revolucionándose en menos de dos décadas.

Actualmente en el bolsillo de una persona, se tiene acceso a millones de datos al instante. Este cambio convive con la necesidad de convencimiento y manipulación, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué la desinformación es un problema en la era de la información? La respuesta puede parecer antojadiza, pero es clara: alguien desea engañar y sacar provecho, ya sea económico, político o ideológico.

Ahora la otra parte, ¿por qué las personas consumen contenido falso? Esta pregunta nos lleva a un camino más complejo: no buscamos ser engañados, sino que estos contenidos se basan en nuestras preferencias y están diseñados para impactar y reafirmar nuestras creencias. ¿Cuál es el problema? Volvemos al inicio, es un engaño.

Estamos en tiempos de consumo acelerado dónde un mar de notificaciones nos induce a leer titulares y a confiar en nuestra capacidad de discernir y seleccionar, sin embargo, qué pasa cuando esos productos “informativos” son hechos a la medida, pero intencionados para deformar la realidad.

Realizamos este recorrido, para tomar conciencia de lo que está en juego cuando leemos y que en ocasiones hemos olvidado: la carga emocional e intuitiva que tienen las desinformaciones.

Mentiras creíbles

Partamos de un hecho, no son un fenómeno nuevo. Durante siglos, el engaño y la manipulación han sido utilizados por propios y extraños para imponer y disuadir a personas, para sacar ventaja de alguna posición o recurso.

Hoy esta situación se ha intensificado, estamos en presencia de grupos que tienen acceso a tecnología para amplificar los efectos que buscan. Por esta razón, vale la pena cuestionarnos ¿Qué pasa con nuestra capacidad de lectura?

Parece anacrónico en tiempos de algoritmos e inteligencia artificial volver a un principio tan elemental como la alfabetización, sin embargo, cuando nos acercamos desde la educación popular al hecho de leer y escribir, no se piensan como habilidades instrumentales, sino momentos donde manifestamos y practicamos una determinada lectura del mundo, es decir, reflejamos las tensiones dinámicas y creativas entre lenguaje y realidad.

¿Qué está en juego?

Cuando leemos y escribimos atravesamos no sólo nuestras dimensiones racionales, también sensoriales y emocionales, por eso cuando hablamos de alfabetización, es un momento de creación de nuestra expresión escrita y oral.

Cuando nos exponemos al torrente de la información, caminamos por algunas fronteras que ponen a prueba nuestras capacidades de comprensión, es decir, el diálogo que debe existir entre el texto y el contexto al que pertenece, pero también, al que va dirigido.

Justamente, en este primer acercamiento es dónde la desinformación capitaliza sus ventajas pues se trata de productos hechos para confirmar nuestros sesgos, sin embargo, desde la alfabetización crítica, deberíamos partir de otro lugar: la problematización de nuestros sentidos y saberes.

Pensar y practicar desde esta perspectiva, procura concientizar sobre nuestro lugar como sujetos de la realidad que vivimos, y la concibe, como ese lugar en tensión de creencias, gustos, prejuicios o valores.

Los textos en este escenario son parte de esa realidad, adquieren forma y sentidos contradictorios. A través de las palabras muestran ese mundo dónde estamos, sentimos y vivimos, es decir, configuran y contienen relaciones de poder, que cómo sujetos estamos expuestos a interpretar y ser influidos.

¿A dónde nos lleva la alfabetización?

Hemos privilegiado la lectura y escritura como algo instrumental, marginando su dimensión como estimulación de la capacidad crítica a partir de la relación contexto-palabra, lo cual ha facilitado que los contenidos falsos reestructuren nuestras percepciones.

Ante esto, emergen sociedades pasivas dónde el discurso de odio capitaliza la impotencia y desesperanza de las personas que favorecen los autoritarismos como salidas idóneas ante su debilidad.

¿Qué mundo es ese que se enuncia? ¿Por qué se enuncia de esa forma? ¿A través de qué se enuncia? ¿Para quién se enuncia? ¿Qué defiende? ¿A qué se opone?

Estas preguntas van en contraposición de la perspectiva instrumental, ya que coloca la lectura más allá de la mera habilidad de descodificación, busca superar la visión mágica de la palabra escrita, procurando ejercitar la comprensión a través del contexto-mundo.

Apuntes para alfabetizarnos

Al leer e interactuar con la desinformación debemos tener presente algo: la lectura del mundo precede a la lectura de la “información”, es decir, estamos en constante tensión con valores, creencias y prejuicios, de los cuales, si no desarrollamos la capacidad crítica de posicionarnos y problematizarlos, estamos expuestos a su reproducción.

Es a partir del posicionamiento como sujetos, que podemos tener como punto de partida las condiciones propias que vivimos, de nuestro lenguaje, inquietudes, aspiraciones y reivindicaciones.

De esta manera liberamos capacidades de interpretación y comunicación dónde podemos caracterizar y diferenciar los intereses de otros, de los propios, y desafiar así los intentos de influirnos o disuadirnos en contra de nuestra propia posición e intereses.

En tiempos de consumo y velocidad, debemos retomar la capacidad de vincular nuestras trayectorias con el mundo que se enuncia, ¿qué tanto de lo que leemos corresponde a lo que vivimos y sentimos? ¿Qué está promoviendo eso que leemos? ¿A quiénes procura beneficiar? ¿De qué forma propone beneficiarnos?

¿Leer antes de leer?

Debemos promover una lectura antes de la “lectura” de la información, es decir, problematizar ese conjunto de representaciones concretas que están dando sentido y forma a determinados aspectos y eventos.

Por ejemplo, qué dice del lugar de las personas migrantes, las mujeres, las diversidades sexuales, por citar ejemplos actuales que representan caldos de cultivo para los discursos de odio que se disfrazan de información.

Estamos ante el reto de “volver a la escuela”, en el sentido más lúdico y creativo que podamos imaginar, ya que tenemos el desafío de impulsar la capacidad de la percepción crítica, interpretación y reescritura de las personas ante las diversas formas de opresión patriarcal, mercantilista, racista y colonialista.

Hoy el desafío principal no está en las pantallas, sino en la problematización de nuestros sentires y saberes en diálogo con ese mundo que vivimos y queremos. Este desafío nos coloca como sujetos activos, aquel que tiene la capacidad de leer el mundo en donde se vive e interactúa, y que al actuar en él, lo relee, lo recrea y lo revive, es decir, lo transforma al reconocerse y estar presente.

Referencias

Amorós, Marc. (2018). *Fake News. La verdad de las noticias falsas*. Plataforma Editorial.
Freire, Paulo. (1991). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. Siglo XXI Editores.

Juventudes y democracia: el poder de la formación política

Argerie Sánchez Mena

Hay una enorme necesidad de formación política para las juventudes. Así en plural, porque no se puede hablar de una sola “juventud” como si fuera una masa homogénea que piensa y se comporta igual. Por el contrario, las juventudes guardan una diversidad que aporta mucha riqueza a cualquier plan o propuesta.

A pesar de esta riqueza, la participación ciudadana de las juventudes es baja. Así, la III Encuesta Nacional de la Persona Joven (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 2018) reportaba que en general la participación social de las personas jóvenes es muy baja. No solo en los procesos electorales, sino también en espacios comunales, como asociaciones de desarrollo, comités de deportes o de la persona joven, o en organizaciones de sociedad civil. Esto a pesar de que estos espacios tienen mucho potencial de incidencia en las temáticas que trabajan o en la realidad más cotidiana de las comunidades, y de que serían un excelente espacio tanto de aporte como de aprendizaje para las juventudes.

Una de las principales razones de la situación es la falta de capacitación en competencias ciudadanas y sobre el funcionamiento del aparato estatal. Si no se entiende cómo funciona el sistema político y no se conocen cuáles son las opciones para involucrarse, es muy difícil que una persona pueda hacer una participación efectiva en la toma de decisiones de su entorno. El resultado es la exclusión de los procesos de definición de medidas que le afectan, en este momento o a largo plazo.

Para atender esas problemáticas han surgido medidas que pretenden mejorar la formación política para las juventudes. Por ejemplo, hay programas de liderazgo en algunas universidades y también otras opciones desarrolladas por la cooperación internacional. En el caso de la Fundación Friedrich Ebert (FES) ha sido a través de programas como “Agentes de Cambio”, que se implementa desde los años noventa y que en años más recientes ha implementado programas formativos para poblaciones específicas, por ejemplo, “Brújula Nica”, un proyecto dirigido a personas jóvenes nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, o el “Laboratorio Democrático” en una edición con personas estudiantes universitarias y en otra edición con la comunidad de Sarchí.

Las juventudes son el presente, no el futuro

En Costa Rica, el padrón electoral para las elecciones nacionales 2018 estuvo compuesto en un 40% por personas menores de 34 años, mientras en las de 2022 un 47 % del electorado se encontraba en el grupo de edad comprendido entre los 18 y 39 años (Quesada, 2023). Es una cantidad grande de personas jóvenes, que si votaran podrían tener una fuerte incidencia en el resultado electoral, más aún si se considera que en Costa Rica se requiere un mínimo de 40% de los votos para obtener la presidencia de la república en primera ronda, lo cual no se ha alcanzado en los últimos procesos por lo que ha sido necesaria la realización de segundas vueltas. De esa manera, el partido ganador lo ha hecho con un porcentaje no muy amplio de votos.

Por su parte, la representación de las juventudes en los espacios de toma de decisión no son proporcionales a la población del país, y las agendas de temas de juventudes muchas veces quedan relegadas o se toman decisiones sobre temas que les afectan sin su participación. En el pasado había un lema muy común que decía “las juventudes son el futuro”, pero en la FES creemos que las juventudes son más bien el presente. Que no deben hacer fila por muchos años para lograr llegar a espacios de toma de decisión, limitarse a “pegar banderas” o a las tareas administrativas. Las juventudes pueden ser un actor importante en la política, ocupar espacios de toma de decisión y presentar propuestas. Contar con formación política va a potenciar sus capacidades y posibilidades de incidir sobre los temas que les convoquen.

No hay democracia sin demócratas

La democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor que hemos encontrado hasta el momento para tratar de convivir de manera pacífica. Tampoco es un sistema que podamos dar por sentado, que sea estático, razón que nos debe hacer entender que, ante la posibilidad de su caída, debemos trabajar por su mantenimiento y profundización. Esto se debe a que no es solo un sistema de gobierno, sino que requiere personas ciudadanas, liderazgos e instituciones comprometidas con sus valores y principios para que funcione de manera efectiva. Es por esto por lo que la formación política es tan importante: Porque es necesario fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de las personas para participar de manera efectiva, y porque es una puerta de entrada para el ejercicio y la expansión de los derechos.

En ese marco, los partidos políticos no son la única vía de participación ciudadana ya que la ciudadanía también puede organizarse e involucrarse desde otros espacios, por ejemplo, organizaciones estudiantiles, sindicales, comunales, temáticas o de poblaciones específicas. De hecho, la *Encuesta sobre actitudes y participación política de juventudes de la FES* (2025) indica que en Costa Rica las personas jóvenes participan más desde organizaciones de la sociedad civil y los temas que más movilizan son el ambiente y los derechos de las juventudes.

La principal razón por la que no participan es la falta de información. Ante este escenario, la formación política puede ser un mecanismo para cerrar las brechas e incluir a las juventudes en la política. Esta no debe ser solamente educación cívica, sino una formación que promueva el pensamiento crítico, la participación y el liderazgo.

Formación política como puerta de entrada a la participación ciudadana

En la experiencia de la FES implementando diversos procesos de formación política, hemos detectado que sí hay una necesidad e interés de las juventudes en aprender sobre política y fortalecer su liderazgo. Cada año se debe hacer un proceso de selección para conceder las becas de los programas, porque las solicitudes recibidas superan los cupos con los que contamos.

Durante los procesos nos hemos dado cuenta que las personas participantes desarrollan o fortalecen una conciencia como personas sujetas de derechos y de que sí existen mecanismos para hacerlos valer. También se robustece una actitud positiva hacia los valores democráticos, mejorando la conciencia sobre la necesidad de derechos como la libertad de expresión, la autonomía personal y la inclusión de poblaciones históricamente excluidas, así como la importancia de la diversidad de opiniones y pluralidad de actores como universidades, movimientos sociales y sindicatos en las conversaciones públicas. Además, se posiciona que es fundamental el respeto de la división de poderes, así como la incorporación de principios como transparencia y rendición de cuentas.

Además, en ejercicios de formulación de proyectos o soluciones para atender problemáticas comunales, las personas refuerzan su sentido de pertenencia y su compromiso para lograr cambios sociales. Todo esto se potencia cuando las personas se dan cuenta de que también son actores que pueden aportar en su comunidad.

Las juventudes en el centro

Para que la formación política para personas jóvenes sea útil y efectiva deben considerarse los intereses y dinámicas de las juventudes en el diseño metodológico y adecuarlo a formatos que sean atractivos. Las generaciones jóvenes, actualmente *millenials* y *centenials*, tienen lógicas diferentes de consumo de contenido y de aprendizaje que las generaciones anteriores. Por eso, es necesario no usar un solo tipo de metodología, por ejemplo, solo lectura de documentos largos, o solo exposiciones magistrales sin participación, sino mezclar distintos estímulos para poder abarcar los diferentes estilos de aprendizaje. Además del uso de técnicas en las que quienes participan tienen un rol pasivo (como escuchar y leer contenidos), se deben incorporar actividades que permitan ejercitar otras habilidades más activas como analizar, decir, hacer, y sobre todo para aplicar los conocimientos y crear propuestas.

Por último, es importante no imponer “lo que siempre ha funcionado”, ni criticar o deslegitimar por hacer las cosas y entender la vida diferente, sino que se requiere poner a las juventudes en el centro y diseñar los procesos de acuerdo a sus características.

Conclusiones

La responsabilidad de fortalecer la formación política de las personas jóvenes no puede recaer únicamente en las propias juventudes. Es un desafío que involucra a diferentes sectores. Los esfuerzos de educación no formal que se realizan desde organizaciones de la sociedad civil tienen mucho valor e impacto, pero su alcance es limitado en cantidad de personas y territorios. Es un buen complemento a procesos de aprendizaje de más cobertura, pero definitivamente es muy importante que la educación formal integre estos aprendizajes de manera más efectiva.

En ese sentido, la sociedad civil debe seguir abriendo espacios de formación y participación, pero también se necesita que el Estado invierta en estrategias que promuevan una ciudadanía activa e informada y que fortalezca el currículo y la metodología que ya se está implementando a través de los sistemas de educación pública.

Sin juventudes con formación y compromiso político, la democracia se debilita. Apostar por la formación política de las juventudes es una apuesta por una sociedad más democrática, equitativa y participativa.

Referencias

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. (2018). *Tercera Encuesta Nacional de Juventudes: Informe de principales resultados*. <https://cpj.go.cr/documento/informe-de-principales-resultados/>

Friedrich Ebert Stiftung. (2024). *Juventudes: Asignatura Pendiente. Encuesta sobre participación y actitudes políticas de las juventudes en América Latina y el Caribe*. www.juventudesFES.org.

Quesada, Nancy. (2023). Inscripción automática de electores en el padrón electoral: un reto que el Tribunal Supremo de Elecciones debe resolver frente al primer voto de las personas jóvenes. *Revista Derecho Electoral*, 36, 87-101. https://www.tse.go.cr/revista/art/36/quesada_vargas.pdf



Preámbulo y la idea de crear comunidad

Roberto Jaén Chacón

Digamos que un grupo de chicas que sostiene armas de alto calibre con capuchas rosadas bailan al atardecer mientras *Everytime* de Britney Spears se escucha. Estoy en la primera fila, miro hacia atrás y no hay una sola persona con su teléfono, comiendo o hablando, están 60 personas de nuestra pequeña sala de cine mirando la pantalla.

A la salida, unos jóvenes discuten la película, una chica dice que quedó maravillada. Dos señores esperan que baje la lluvia conversando sobre la violencia en la sociedad norteamericana. *Spring Breakers* de Harmony Korine ha cumplido su cometido. La propuesta del día funcionó.

Preámbulo nació en 2015 como el “preámbulo” a una eventual cinemateca costarricense. Una vez el proyecto de cinemateca no siguió adelante, el espacio se convirtió entonces en el programa de formación de audiencias y exhibición de cine del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Tres o cuatro veces por semana, una película gratuita para la audiencia josefina. Desde el año 2022 soy el curador de Preámbulo.

Yo no creo que exista sucedáneo para ver una película en pantalla grande. Entiendo a las personas que agradecen la posibilidad de catálogos inmensos para ver desde casa en servicios de *streaming*. Comprendo perfectamente a aquellos que disfrutaron antes ir al videoclub y rentar películas o que, algo al margen de la ley, consiguieron ver películas en su computador para extender su cinefilia.

Por supuesto que soy uno de esos que paga servicios varios de *streaming* y pasa horas tratando de que su algoritmo le acerque a la pantalla principal las mejores películas o las que sean más cercanas a lo que la inteligencia artificial haya ubicado como “mi gusto”, pero ahí empiezo a ver problemas.

El trabajo del curador no es proponer películas que le gusten a las personas o satisfacer lo que una gran audiencia premia, o premió, con la compra de un boleto en las salas comerciales. El trabajador de quien hace programación o curaduría es proponer ideas, vincular películas y temáticas; es, ultimadamente, quién dialoga de manera permanente con una audiencia en busca de expandir horizontes culturales y estéticos.

Esta idea me ha fascinado desde que empecé con la curaduría. El algoritmo, de manera bastante automatizada y estandarizada, propone un mismo tipo de películas al tiempo que, sobre la base de “tendencias”, ofrece sugerencias basadas en grandes conglomerados de “users persona”. El curador, ofrece ideas, se equivoca, no propone siempre lo más relevante, propone lo que considera puede provocar respuestas tanto individuales como colectivas. Y esto de lo colectivo es una frase clave.

Dice Peter Bosma en su libro *Film programming* que ver una película es un proceso abierto de participación y creación de valor. Ver, en la sala, produce respuestas individuales pero también una experiencia compartida.

La reflexión de Bosma es importante no solo porque dota de una relevancia al trabajo de la curaduría sino que, también, continúa con la idea de lo individual y lo colectivo en la experiencia de asistir a una sala de cine. Esto considero que es clave. No me encuentro descubriendo nada nuevo con la importancia de la experiencia colectiva. Lo que posiblemente sí puedo extender es la idea de que la experiencia colectiva produce una manera distinta de entender el cine y, sobre todo, en los espacios que no procuran el lucro, a diferencia de las salas comerciales, la experiencia colectiva produce *comunidad*.

Zygmunt Bauman arguye sobre la liquidez de nuestros vínculos. Yo, también, pensaría que nuestra relación con el cine es cada vez más líquida, cada vez más mediada por algoritmos y grandes conglomerados, en oposición a lo que sería la discusión, la colectividad y la cercanía con el otro a través de la experiencia colectiva del cine.

La sala de cine de una cinemateca, o proyecto de cinemateca como Preámbulo, es entonces no solo un espacio para salvarse de la estandarización de un gusto, es un espacio comunitario, y en época de liquidez e individualismo “hacer comunidad” es un acto casi subversivo. En un abismo de incapacidad de construir comunidades reales, la sala de cine puede ser aquel espacio de participación ciudadana más complejo: el comunitario.

Inicié estas breves palabras hablando sobre la película *Spring Breakers* de Harmony Korine, película que vi en la sala con la audiencia. No es un documental político, tiene múltiples lecturas, su valor, como el de cualquier película, radica en la experiencia de la audiencia y su necesidad de volver a partir de un espacio de participación que hace propio.



Las reflexiones alrededor de la participación ciudadana en la cultura tienden a rondar las ideas de política públicas, artistas, economía naranja, entre otros, permítanme empezar a pensar esta dimensión: la de querer pertenecer a una comunidad que observa arte u lo dimensiona en grupo, aún y si eso fuera solo la compañía de la sala y una conversación posterior. Allí tal vez se esconda una respuesta, un espacio, un lugar para volver a lo colectivo y participar, dos temas actualmente complejos y en crisis para el análisis.

En un abismo de incapacidad de construir comunidades reales, la sala de cine puede ser aquel espacio de participación ciudadana más complejo: el comunitario.

¿Puede el seguimiento y evaluación de políticas públicas contribuir a la democracia?

Catalina Morales López

En la última década, América Latina ha sido víctima de un resurgimiento inquietante del autoritarismo, que ha amenazado los logros democráticos alcanzados. Este fenómeno no solo afecta la estabilidad política de los países, sino que también impacta en el bienestar social y económico de las personas. En este contexto, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas (y otras intervenciones como los programas y proyectos) emergen como mecanismos y vías cruciales para contrarrestar el avance del autoritarismo y fortalecer la democracia.

El seguimiento y evaluación permiten analizar la efectividad, pertinencia, eficacia y otros elementos de las decisiones gubernamentales e institucionales, procurando garantizar las necesidades y expectativas de las poblaciones y atendiendo la problemática identificada. Al proporcionar información transparente y objetiva, estas prácticas fomentan la rendición de cuentas y promueven la participación activa de la sociedad civil en el ciclo de las intervenciones públicas. Así, el fortalecimiento de estos mecanismos se convierte en un imperativo para preservar y revitalizar la democracia en un contexto desafiante como el actual.

Lastimosamente, existe en el imaginario colectivo la idea de que el involucramiento y la participación de la sociedad civil se debe dar únicamente en la etapa de identificación de necesidades y formulación de las políticas. Sin embargo, en la etapa de seguimiento y evaluación -mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana- se podría garantizar una mejor gestión gubernamental y evitar la concentración excesiva del poder.

A continuación, algunos aspectos en los que el seguimiento y la evaluación de políticas públicas pueden contribuir a la consolidación democrática.

1) Carácter político en la evaluación de políticas públicas: Las evaluaciones de políticas pretenden ser procesos objetivos, pero la realidad es que los diversos actores van a intentar que en estos procesos evaluativos prevalezcan los intereses políticos, económicos e ideológicos del gobierno de turno y de las personas tomadoras de decisiones. Ante dicha premisa, en los sistemas democráticos, el seguimiento y evaluación permiten revisar e identificar con mayor independencia de los grupos de poder lo que se ha hecho bien o qué aspectos se pueden mejorar, lo cual podría facilitar que se tomen decisiones para ser lo más eficaces y eficientes con los recursos públicos. Esto permite promover la buena práctica de la rendición de cuentas y mejorar o fortalecer las políticas evaluadas. Sin embargo, en contextos autoritarios, podría presentarse el escenario de evaluaciones donde se permita la manipulación para justificar decisiones predeterminadas o fortalecer el poder de ciertos grupos.

2) Evaluación como herramienta de legitimación democrática: La transparencia y acceso a la información en el seguimiento y evaluación en las intervenciones públicas podría fortalecer la confianza y percepción ciudadana en torno a los diversos procesos que conlleva el ciclo de las políticas públicas. A través del análisis de impacto, la evaluación permite mejorar la eficiencia de las intervenciones públicas (la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos) y ajustar desigualdades en la distribución de recursos. En países con tendencias autoritarias, la ausencia de evaluaciones independientes puede perpetuar políticas que benefician sólo a ciertos sectores del poder (García Sánchez, 2009).

3) Control del poder y participación ciudadana: Los procesos de seguimiento y evaluación pueden descentralizar el poder y aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en su rol de veeduría social. Herramientas como las auditorías sociales y los observatorios ciudadanos permiten que la sociedad civil tenga un rol activo en la fiscalización de políticas y, por ende, obtener información valiosa para este proceso de seguimiento y evaluación, respondiendo a preguntas como “¿la política pública está respondiendo a las necesidades y problemáticas de la(s) población(es) objetivo?; ¿los recursos públicos destinados a abordar esta problemática se están utilizando de manera oportuna y eficiente?” En ese sentido, las propias poblaciones a las que va dirigida las intervenciones públicas pueden participar y señalar sus opiniones y percepciones de la formulación e implementación de las políticas. Esta participación ciudadana podría impedir la concentración excesiva del poder, democratizar la información y reducir el riesgo de abusos autoritarios al garantizar contrapesos efectivos.

4) Evitar la instrumentalización política de la evaluación: Si bien la evaluación de políticas públicas es una manera valiosa de investigación, también puede ser utilizada como instrumento de poder para justificar decisiones previamente tomadas, en lugar de ser un mecanismo para mejorar la gestión. Para evitar la manipulación, es una buena práctica que los procesos evaluativos sean conducidos por equipos técnicos imparciales (tanto externos como internos de la institución que implementa la política) en conjunto con la participación de las poblaciones objetivo. Asimismo, es importante que se utilicen metodologías transparentes y con suficiente acceso a datos públicos. Esto se aleja de las prácticas que se dan en los regímenes autoritarios en los que es común ver evaluaciones parcializadas que, por ejemplo, presentan un falso progreso y ocultan información crítica (García Sánchez, 2009).

5) Metaevaluación y calidad democrática: La metaevaluación (evaluación de las evaluaciones) es un mecanismo clave para garantizar que estos procesos sean rigurosos y objetivos. Permite verificar si las recomendaciones derivadas de la evaluación han sido implementadas y si los resultados reflejan la realidad de manera fidedigna. En sociedades democráticas, la metaevaluación podría venir a reforzar la confianza institucional y detectar fallas en la gestión en caso de que no se hayan acatado las recomendaciones de la evaluación previa, mientras que en contextos autoritarios puede revelar fallas sistémicas alejadas de criterios técnicos y que más bien responden a intereses de las personas tomadoras de decisión.

Dado este contexto, el fortalecimiento de la democracia se vuelve más urgente y relevante que nunca.

El seguimiento y la evaluación de políticas emergen como herramientas clave no solo para la gestión eficiente de los recursos públicos, sino también para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía

La historia reciente de la región revela que, en muchos casos, la debilidad institucional y la ausencia de mecanismos de control han permitido la consolidación de regímenes que erosionan las libertades democráticas. Por lo tanto, implementar un marco robusto de seguimiento y evaluación de políticas se presenta no solo como una opción viable, sino como una urgencia para contrarrestar estas tendencias autoritarias, contribuye a una mejor gestión de los recursos y promueve la confianza ciudadana en las instituciones al involucrar a la ciudadanía en estos procesos, pues fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, aspectos fundamentales para una democracia saludable.

De esa manera, cobra sentido la propuesta planteada por Tapella y otros (2021, 61) sobre la evaluación participativa de diversos actores, entre esos la ciudadanía, cuando señala que “la práctica participativa da cuenta así de un componente normativo, centrado en la democratización del proceso de indagación, en la creación conjunta de conocimiento y en dar respuesta de un mejor modo a las necesidades y exigencias de cada contexto concreto”, acentuando la transformación y desarrollo social desde ese lugar.

Por tanto, generar un ambiente propicio para procesos de seguimiento y evaluación de carácter más participativos, va a depender tanto de la oportunidad de participar que tenga la ciudadanía como de su capacidad y voluntad de hacerlo. Así, estos espacios de participación deberían poder desarrollarse en contextos donde existan condiciones democráticas y la voluntad política e institucional de quienes diseñan e implementan los procesos de evaluación para crear espacios genuinos de participación, o caso contrario, por la presión e incidencia de la sociedad civil para abrir dichos espacios.

En conclusión, el fortalecimiento de la democracia en América Latina ante el auge del autoritarismo depende en gran medida de nuestra capacidad para implementar y sostener procesos participativos, incluyendo de seguimiento y evaluación de políticas. A través de la transparencia y la rendición de cuentas efectiva podremos construir sociedades más democráticas, justas y resilientes, capaces de resistir las tendencias autocráticas y de promover un futuro donde los derechos y libertades sean respetadas y protegidas.

Referencias

García Sánchez, Ester. (2009). Metaevaluación de políticas públicas: una visión desde la ciencia política. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 43, 127-154. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533674006>

Tapella, Esteban; Rodríguez Bilella, Pablo; Sanz, Juan Carlos; Chávez-Tafur, Jorge, y Espinosa Fajardo, Julia. (2021). *Siembra y cosecha: Manual de evaluación participativa*. Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo.

¿Por qué es importante reconocer al contrario?

María Camila Moncada Guevara

Hablar con el *otro*, entender al *otro*, contextualizar sus valoraciones, incomodidades y descontentos. Creo que esas tareas están pendientes en el análisis general sobre las democracias contemporáneas y sus horizontes futuros, y en la investigación en ciencias sociales, de manera particular.

Usualmente, y no sin razón, las personas analistas y académicas solemos poner el foco en las estrategias y conquistas de los actores progresistas, aquellos que propenden por el reconocimiento de nuevos derechos o la universalización y cumplimiento de los ya existentes. Mucho hemos aprendido de ellos y, en su gran mayoría, valoramos positivamente el rol que cumplen en la tarea de vincular el mundo de la vida con la política. Por ejemplo, usualmente no dudamos de la importancia pública de los movimientos ambientalistas o de las luchas de las comunidades originarias por la defensa de los territorios y la naturaleza.

Tampoco cuestionamos que las reivindicaciones de las mujeres y los movimientos feministas sean justas y necesarias para reconocer y corregir desigualdades y violencias históricas. Sin embargo, ¿qué pasa con las valoraciones que hacemos sobre aquellos actores a los que solemos atribuir las características de fascistas, fanáticos religiosos o “anti-derechos”? ¿No será que reproducir estos lenguajes es una manera de acentuar el antagonismo entre un “nosotros” y un “ellos” que abre brechas cada vez más insalvables?

Estoy convencida de que no todo asunto es susceptible de ser consensuado. Pensar que la democracia solo es posible al alcanzar acuerdos es condenarla a la constante frustración de sus expectativas. Difícilmente las aspiraciones feministas o de los movimientos LGBTIQ+ podrán coincidir o estar dispuestas a ceder frente a las organizaciones que dicen defender la vida y la familia. Tampoco creo que algo así sea deseable per se. Pero una cosa es reconocer la presencia de conflictos inherentes a la coexistencia de expresiones, creencias o moralidades diferentes y otra cosa es desvalorizar a alguno de los actores, desdeñar su participación en las vías y mecanismos institucionales o, incluso rechazar su existencia misma.

En el caso de los investigadores e investigadoras en ciencias sociales, algunas veces hemos caído en el error de dar como ciertos algunos prejuicios, estereotipos y generalizaciones que reemplazan el conocimiento sobre estos actores y movimientos y acerca del entramado de significados que construyen, aquello que priorizan, buscan, sueñan o demandan. Esta omisión más o menos deliberada no ha impedido su constitución como sujetos colectivos emergentes, pero sí trunca la capacidad de explicar la importancia que van adquiriendo, aquello que cimienta sus identidades y el papel que cumplen en los procesos políticos y sociales contemporáneos. Al final, terminamos sorprendidos porque no veíamos venir lo que se desarrollaba, no sólo en el nivel de las altas cúpulas o las élites, sino también en las bases sociales y sus capilaridades.

La preocupación por ampliar el entendimiento sobre lo que consideramos “contrario” no radica solamente en la posibilidad de explicar y pronosticar. Esto es, también, un ejercicio de construcción democrática. Basta echar una mirada a lo que la literatura de movimientos sociales ha etiquetado como *ugly movements* (como decía Charles Tilly), para notar que allí, en las formaciones neoconservadoras, de la nueva derecha o en aquellas ancladas en valores religiosos, hay personas convencidas de la importancia y la justicia de sus reivindicaciones. A través de narrativas, discursos y prácticas han construido visiones cada vez más arraigadas sobre el mundo en el que viven y sobre aspectos políticos fundamentales, como el rol que debería cumplir el Estado, las instituciones y las leyes frente a los problemas que consideran más urgentes: la migración, la supuesta destrucción de la familia, la pérdida de los valores o el avance de la llamada “ideología de género”.

En un primer momento, el asunto no es si podemos, o no, tolerar los discursos que estos actores enarbolan. Esta será una evaluación que debe definirse en los espacios público-políticos. La cuestión, para las y los analistas, es aceptar que estas expresiones existen y que tienen raíces profundas en diferentes dimensiones: malestares frente a la globalización, necesidades insatisfechas, expectativas rotas, incertidumbres epocales y contradicciones no resueltas. ¿Cómo podemos identificar estos elementos si no es desde una disposición al diálogo genuina? Dialogar no es aceptar acríticamente al otro o la otra, pero propicia el cumplimiento de una condición básica para las democracias: el reconocimiento.

Axel Honneth, sociólogo y filósofo alemán, afirma que uno de los principales problemas dentro de las comunidades políticas que aspiran a ser democráticas es el del reconocimiento intersubjetivo. En las democracias, no basta –aunque sea indispensable– establecer procedimientos claros de acceso al poder político, canales de participación o mecanismos para tramitar demandas sociales. Se requiere, además, propiciar culturas políticas que legitimen, refuercen y sostengan los valores democráticos.

Uno de los componentes más importantes para lograr aquello es, en palabras de Honneth, una ciudadanía que se sienta valorizada, a través del Estado, las instituciones y los demás actores. Sentirse valorizado es, en palabras sencillas, saberse útil y valioso para el propio entorno.

Lo contrario al reconocimiento, nos dice Honneth, es el menosprecio. El menosprecio se evidencia de múltiples formas: a través de la violencia física o simbólica, por medio de la cual se le dice al otro sujeto que su existencia es indigna; la invalidación de formas de vida colectiva, a través de la prohibición legal o la implementación de estrategias para acabar con ellas; y, finalmente, la falta de protección del Estado, mediante la acción o la omisión, para garantizar la salvaguarda de la integridad personal y la libertad de expresión. Uno de los efectos de estas formas de menosprecio es, en muchas ocasiones, la radicalización de las personas a partir de las creencias compartidas o de los valores identitarios sobre los que construyen sus narrativas comunes.

Durante mi última investigación, que trató sobre las culturas políticas en los movimientos feministas y el movimiento “provida” en Colombia, tuve la oportunidad de entender el efecto que el menosprecio en determinados espacios sociales ha causado, sobre todo, en la generación más joven de los y las activistas provida. Estos jóvenes, de entre 15 y 30 años, han construido una narrativa de rebeldía en contra de lo que señalan como el “feminismo hegemónico” y la “ideología dominante”. Las burlas por portar el “pañuelo celeste”, el estigma de ser llamados “anti-derechos” o la descalificación por “ser hombres” opinando sobre aborto, les ha impulsado a desarrollar toda una agenda de acción colectiva que imita, en muchos sentidos, a la de sus contrincantes feministas. Así, han empezado a desarrollar distintas formas de incidencia en las instituciones políticas, al tiempo que fortalecen la movilización en las calles y en las redes sociales, y consolidan su base de apoyo al interior de las iglesias y congregaciones de fe.

Entender la necesidad de reconocimiento intersubjetivo, como una condición para la construcción democrática entre contrarios, implica des-escalar los prejuicios mediante los cuales reproducimos violencias simbólicas o invalidaciones que menosprecian posturas o formas de vida. Significa, también, aceptar que todas las subjetividades e identidades pueden tener lugar en las discusiones públicas, mientras se acojan a esta máxima de reconocimiento frente a los demás. No podemos abogar por el reconocimiento de ciertas diversidades y desestimar otras; ni defender los afectos, pero solo validar los nuestros o los de los grupos afines a una cierta ideología.

Sin duda, este criterio no puede llevar a justificar cualquier tipo de postura o posicionamiento. Sin embargo, cualquier evaluación sobre los principios, prácticas y repertorios de las colectividades y movimientos debe realizarse sobre la base de una observación cuidadosa, informada y profunda. Las asociaciones comunes, que se utilizan en el lenguaje y la contienda política, no pueden ser replicadas sin tener en cuenta las especificidades y las características contextuales de los grupos. Por ejemplo, no todos los actores religiosos pueden ser pensados como conservadores; así como tampoco todos los actores conservadores pueden ser asociados, irreflexivamente, con el autoritarismo o el fascismo.

Actualmente, la investigación social tiene el desafío de procurar claves de traductibilidad para un escenario babélico, en donde cada cual defiende su propio sentido sobre la sociedad, la política, los derechos y el futuro. Sin estas claves es imposible garantizar la construcción de vías institucionalizadas y no institucionalizadas para tramitar los conflictos y las contradicciones que surgen en el seno de la sociedad. Por ello, la tarea es doble: mantener el impulso a las fuerzas sociales que han demostrado su contribución a las democracias, al tiempo que se produce conocimientos suficientes para interpretar los actores emergentes, desde sus propios términos de referencia, condiciones y visiones de mundo.

Entrevista colectiva: Manual de supervivencia

La sociedad civil frente a la incertidumbre y el autoritarismo en la región

Las organizaciones de la sociedad civil en América Latina están en un momento de encrucijada. Por un lado, enfrentan un panorama de recortes significativos en la cooperación internacional, su fuente de vida para sostener los proyectos de transparencia, democracia y gobierno abierto que realizan. Por el otro, se ven forzadas a resistir el creciente avance de gobiernos y/o medidas autoritarias que buscan minar su trabajo e incluso su existencia en los casos más extremos. Por tanto, esta es una lucha por su sostenibilidad, su influencia y -en última instancia- por la propia estabilidad de los sistemas democráticos en la región.

En esta edición, nuestra entrevista colectiva reúne las voces y experiencias de varias personas líderes de organizaciones de la región latinoamericana:

- **Naida Romero de la organización Semillas para la Democracia, Paraguay**
- **Juan Carlos Aguilar Moncada de la organización Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Honduras.**
- **Beatriz Helena Gil del Programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, Colombia.**
- **Colombina Schaeffer de la organización Ciudadanía Inteligente, Chile.**

Sus perspectivas constituyen un insumo sumamente relevante para que las organizaciones de la sociedad civil de la región puedan enfrentar la situación actual. Aquí, presentamos una síntesis o “mirada de conjunto” de sus reflexiones.

Para consultar las entrevistas completas visite: <https://bit.ly/entrevistacolectiva>

1. Desde la experiencia propia de la organización, ¿Cómo ha evolucionado la cooperación internacional dirigida a proyectos que promueven el gobierno abierto, la democracia y la transparencia en los últimos años?

La cooperación internacional en materia de gobierno abierto, democracia y transparencia ha atravesado una transformación significativa en años recientes. Hubo un momento de gran impulso, en el que se apoyaron proyectos de la sociedad civil, vinculados a las tecnologías cívicas, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Sin embargo, el escenario se ha transformado. Los apoyos se han reducido de manera significativa, lo que ha dificultado la continuidad de los proyectos, tal y como señala Naida Romero: *“temas que parecían consolidados y libres de retrocesos hoy enfrentan nuevos desafíos, evidenciando que los avances en estas áreas no están garantizados”*.

Juan Carlos Aguilar coincide al indicar que *“la cooperación para dichos proyectos, al menos desde la óptica de sociedad civil, ha disminuido, ya que se ha focalizado en otros temas o se canaliza de manera directa con la institucionalidad”*, sobre todo con instancias del Poder Ejecutivo. Esto ha limitado el margen de acción de las organizaciones sociales, que enfrentan un entorno cada vez más restrictivo.

En el caso colombiano, Beatriz Helena Gil explica que, tras el Acuerdo de Paz, gran parte de los recursos se orientaron a la implementación del mismo. A pesar de este énfasis, la cooperación internacional mantuvo el apoyo a proyectos relacionados con los derechos humanos, la transparencia y la participación: *“la cooperación internacional ha ayudado a fortalecer las capacidades institucionales de diversas entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la implementación de mejores prácticas y herramientas para la gestión de proyectos y la rendición de cuentas”*.

No obstante, para las organizaciones persisten grandes desafíos de sostenibilidad. Entre estos retos, Colombina Schaeffer señala que *“el número de financistas en este ecosistema es reducido, lo que genera un desafío en términos de diversificación de las fuentes de financiamiento”*. A esto se le suma la dificultad de dar continuidad a los esfuerzos: con frecuencia, un tema que gana popularidad deja pronto de recibir apoyo financiero. También es común que haya proyectos que se repitan entre organizaciones, e incluso que se inicien desde cero aun cuando existan avances previos en el sector y a pesar de los intentos de articulación.

Colombina también indica que el acelerado cambio tecnológico dificulta que la sociedad civil pueda seguirle el “ritmo” de avance que sigue el sector privado, principalmente por falta de recursos y la escala de los emprendimientos. No obstante, en este escenario, la reconfiguración geopolítica impulsada por el Sur Global y las economías emergentes podría abrir nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación internacional y acelerar los procesos de innovación pública en los próximos años.

2. ¿Cuáles son los principales retos que han tenido que enfrentar las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de cooperación internacional de los últimos años?

El acceso a financiamiento sostenible y diversificado es quizás el mayor desafío: los proyectos suelen ser de corta duración, con recursos insuficientes para garantizar continuidad e impacto. Como enfatiza Beatriz, *“entre los retos más importantes están el financiamiento sostenible que vaya más allá de un pequeño proyecto... y la diversificación de fuentes, incluyendo una participación del sector privado”*.

La competencia por fondos se ha intensificado y muchas organizaciones pequeñas quedan relegadas. Juan Carlos advierte que *“menos oportunidades de financiamiento y mayor competencia entre organizaciones de la sociedad civil muchas veces impide que las más pequeñas tengan capacidad de competir”*, a lo que se suma el papel creciente de empresas implementadoras que sustituyen funciones históricamente asumidas por la sociedad civil.

El contexto nacional también pesa. En Paraguay, según Naida, *“la labor de las organizaciones de la sociedad civil ha sido cuestionada, estigmatizada por el partido oficialista que no acepta ningún cuestionamiento sobre los manejos poco transparentes de los recursos públicos”*. Por su parte, en países como Chile, su condición de “ingresos altos” redujo drásticamente la cooperación internacional disponible, forzando a muchas organizaciones a precarizarse o incluso cerrar.

Colombina agrega que esta dependencia externa genera vulnerabilidad, pues *“la reciente crisis de financiamiento internacional derivada de decisiones del gobierno de EE.UU. evidenció la fuerte dependencia de la sociedad civil latinoamericana de fondos vinculados directa o indirectamente a ese país”*. Frente a esto, algunas iniciativas exploran modelos híbridos como empresas B (que conjugan la rentabilidad con procesos amigables con el ambiente y la incidencia social) y emprendimientos sociales, aunque todavía son incipientes.

3. Estados Unidos ha hecho importantes recortes a la cooperación internacional. ¿Cómo estos recortes podrían impactar las actividades de su organización y el desarrollo social y político de su país?

Los recortes de Estados Unidos a la cooperación internacional generan impactos significativos y diferenciados en la región. En el caso colombiano, la alta dependencia de estos fondos vuelve el panorama especialmente crítico. Como advierte Beatriz, *“los recientes recortes en la cooperación internacional afectan especialmente a Colombia, dado que ha sido el principal receptor de estos recursos en la región”*. Esto limita la capacidad operativa de muchas organizaciones e instituciones, comprometiendo su incidencia en debates públicos y procesos de fortalecimiento democrático.

Más allá de Colombia, los efectos se extienden a otros países latinoamericanos. Colombina Schaeffer subraya que *“independientemente del impacto en el corto plazo, en el largo plazo todo el ecosistema del tercer sector se verá afectado... la reducción de estos fondos limita el monitoreo ciudadano, afecta la transparencia gubernamental y restringe los espacios de participación democrática”*. Además, alerta sobre el precedente político que representan estos recortes, al debilitar la sociedad civil y facilitar la concentración de poder.

Beatriz señala que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido cómo la reducción de fondos pone en riesgo *“programas esenciales en salud reproductiva para mujeres y niñas”*. Por tanto, si ya era necesario hacerlo desde antes, el contexto actual hace que sea fundamental que el gobierno nacional establezca alianzas con organizaciones de la sociedad civil para garantizar la continuidad de estos proyectos y evitar dejar a poblaciones vulnerables sin apoyo.

Colombina coincide al señalar riesgos desde una perspectiva más amplia: *“el debilitamiento de este sector erosiona la sostenibilidad de las democracias locales y la participación ciudadana”*. La reducción de fondos, no solo limita el monitoreo ciudadano, la transparencia gubernamental y los espacios de participación democrática, sino que también envía un mensaje político preocupante: *“al debilitar a la sociedad civil, se facilita la concentración del poder y se reduce la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas y monitorear el ejercicio del poder”*.

Las consecuencias también se sienten de forma directa en el funcionamiento interno de las organizaciones. Naida lo resume con claridad: *“la sostenibilidad sin recursos es una utopía”*. La falta de fondos reduce la capacidad de incidencia, provoca sobrecarga laboral y desgaste en los equipos, e incluso, lleva a la suspensión de proyectos en marcha.

Aunque ante este escenario algunas organizaciones reportan un impacto inmediato limitado, la perspectiva futura es preocupante, tal y como menciona Juan Carlos: *“tenemos conocimiento de un buen número de organizaciones de la sociedad civil que han sufrido recortes del 50% o 70% de su presupuesto que dependía de USAID”*. Esto no solo pone en riesgo programas de la sociedad civil, sino también iniciativas nacionales en educación, salud y agricultura.

En conjunto, la dependencia de la cooperación plantea un desafío importante. Asimismo, los recortes en el flujo de recursos estadounidenses afectan la sostenibilidad de proyectos claves, erosionan el tejido democrático (en ámbitos como la equidad social y el control del poder), y obligan a las organizaciones a buscar nuevas fuentes de financiamiento y estrategias de adaptación para sostener sus agendas.

4. ¿Cuáles estrategias o "buenas prácticas" podrían implementarse (o ya se han implementado) para sortear los retos mencionados? ¿Cuáles consejos o sugerencias podría compartir con otras organizaciones que experimentan esta situación?

Frente a los recortes y la incertidumbre financiera, las organizaciones de la sociedad civil han puesto en marcha distintas estrategias para sostener sus agendas y su impacto. La primera de ellas es la diversificación de fuentes de financiamiento, incluyendo alianzas con sector privado, universidades y fondos multilaterales. Juan Carlos lo resume en la necesidad de *“la búsqueda de donantes nacionales y fondos privados, tanto locales como internacionales que permitan continuar con el trabajo”*.

La flexibilidad y la capacidad de adaptación también se vuelven esenciales. Beatriz plantea cuatro ejes estratégicos:

1. **Diversificación de fuentes de financiamiento:** Explorar nuevas oportunidades de cooperación internacional y descentralizar los ingresos a través de alianzas con universidades, el sector privado y organismos multilaterales.
2. **Priorización de proyectos:** Focalizar los recursos en iniciativas consolidadas en lugar de apostar por proyectos experimentales o nuevas líneas de trabajo que impliquen costos adicionales. Esto permitirá mantener el impacto sin comprometer la sostenibilidad financiera.
3. **Modelos de autogestión y eficiencia operativa:** Buscar formas de optimizar recursos y automatizar procesos. La incorporación de herramientas como la inteligencia artificial para la gestión de datos y monitoreo, puede reducir costos operativos. Además, fomentar la colaboración entre organizaciones mediante redes de apoyo y uso compartido de infraestructura ayudará a mitigar la dependencia de fuentes externas.
4. **Estrategias de comunicación y legitimidad pública:** El recorte de cooperación internacional no solo es un tema financiero, sino que también viene acompañado de un discurso político que cuestiona la necesidad de apoyar ciertas agendas internacionales. Por ello, las organizaciones deben reforzar su vínculo con la ciudadanía, visibilizando sus logros y mostrando su impacto tangible. Una comunicación clara y basada en resultados fortalecerá su legitimidad y facilitará la construcción de nuevas alianzas.

Colombina resalta la importancia de conectarse y compartir información en redes de apoyo, lo que ayuda a dimensionar la crisis y explorar salidas colectivas. En algunos casos, esto ha llevado a fusiones o sociedades entre organizaciones, con el fin de garantizar la continuidad de las causas: *“lo importante es que las organizaciones y sus causas permanezcan en el tiempo”*. También destaca los esfuerzos por visibilizar el impacto de los recortes para que la ciudadanía presione a las instancias y personas tomadoras de decisiones.

Por su parte, Naida reconoce que muchas organizaciones fueron tomadas por sorpresa, pero insiste en dos prioridades claras: *“trabajar fuertemente en la identificación de posibles nuevos donantes... y optimizar los recursos, reduciendo al máximo los costos operativos”*.

En conjunto, estas experiencias muestran que la respuesta pasa por un equilibrio entre innovación, colaboración y eficiencia: abrirse a nuevas fuentes, fortalecer las alianzas, visibilizar los resultados y mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a un entorno cambiante.

5. Además de los cambios en la cooperación internacional, en varios países latinoamericanos se ha presenciado el avance de gobiernos o medidas antidemocráticas e incluso autoritarias. ¿Cómo valora la situación política de su país en esta materia?

La región atraviesa un momento complejo, marcado por retrocesos democráticos y la amenaza de medidas autoritarias, aunque con realidades distintas en cada país. En Paraguay, Naida advierte que *“las medidas antidemocráticas están cada vez más fuertes... actualmente con la aprobación de la ley de control de las ONGs que básicamente lo que busca es cercenar el trabajo de la sociedad civil organizada”*. Este tipo de normativas restringe el espacio cívico y limita la acción de las organizaciones.

En Honduras, parece que la situación tampoco es halagüeña. Juan Carlos señala que *“tenemos un gobierno que no respeta los valores democráticos ni el Estado de derecho... se han tomado muchas decisiones al margen de la ley”*, a lo que se suma la cooptación de poderes y un proceso electoral próximo en posible riesgo. Asimismo, señala el representante de ASJ, que en este país *“la apertura y respeto a libertades ha empeorado en el sentido de que ya se ha querellado a medios de comunicación, políticos de oposición y se ha amenazado a otros si generan crítica en contra del gobierno. Sin lugar a dudas, las libertades están en riesgo y no existe una apertura gubernamental.”*

Colombia ofrece un contraste: aunque persisten tensiones, todavía se mantienen espacios de participación y control ciudadano. Beatriz destaca que *“ejemplos recientes, como la intención de convocar una consulta popular y las elecciones programadas para el próximo año, evidencian que el sistema democrático sigue operando”*. No obstante, alerta sobre la fragilidad institucional y el riesgo de que discursos autoritarios y reducciones presupuestarias abran la puerta a retrocesos en organismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz.

En Brasil y Chile, los diagnósticos son más matizados. Colombina explica que *“Brasil presenta un escenario complejo tras un período de intensa polarización política... persisten desafíos como ataques a los tribunales superiores, amenazas a la libertad de prensa, desinformación y deterioro del espacio cívico”*. Sin embargo, las instituciones siguen funcionando y la sociedad civil conserva un papel vigilante. En Chile, a pesar de déficits democráticos y polarización creciente, el aparato institucional se mantiene relativamente sólido y el espacio cívico continúa abierto: *“con todos los déficits democráticos y deudas en materia de justicia social, Chile estaría en una posición un poco más favorable para atravesar esta deriva autoritaria”*.

6. ¿Cómo deberían relacionarse las organizaciones de la sociedad civil con gobiernos poco comprometidos con la democracia, la libertad de expresión y el gobierno abierto?

La relación entre la sociedad civil y los gobiernos con prácticas autoritarias plantea un problema de alta complejidad: mantener la independencia y un enfoque crítico sin dejar de buscar espacios de incidencia que permitan proteger la democracia y los derechos humanos fundamentales.

Frente a esta realidad, Beatriz plantea una estrategia equilibrada basada en tres pilares.

1. **Diálogo estratégico:** Participar en espacios formales que permitan exigir transparencia y rendición de cuentas, como mesas de trabajo o audiencias públicas. Sin embargo, esto debe hacerse sin legitimar prácticas autoritarias ni convertirse en un mero instrumento de validación del gobierno.
2. **Denuncia y resistencia:** Documentar y visibilizar abusos y restricciones a derechos, recurriendo a mecanismos internacionales como la CIDH o relatores especiales de la ONU. La presión externa puede ser un factor clave para frenar retrocesos democráticos.
3. **Protección de la autonomía:** En un contexto de crisis de financiamiento, es fundamental evitar la cooptación por parte del Estado o la dependencia de fondos condicionados. Mantener una diversificación de fuentes de ingreso garantizará que las organizaciones puedan seguir operando con independencia y sin autocensura.

Colombina enfatiza la necesidad de flexibilidad y adaptación, ya que la respuesta dependerá del contexto: *“se pueden hacer esfuerzos por encontrar aliados que ayuden a parar tendencias autoritarias, pero también hay momentos en que la sociedad civil debe tomar posturas claras y decididas en torno al resguardo de la democracia”*. Además, subraya la importancia de la sensibilización ciudadana, de entregar información clara y veraz, y de adoptar protocolos de seguridad física y digital ante el cierre del espacio cívico.

La clave es clara, no debe haber ni confrontación absoluta ni colaboración acrítica. La independencia es irrenunciable, y la estrategia debe enfocarse en presionar, denunciar y proponer, sin comprometer principios fundamentales. - Beatriz

En otro plano, Naida recuerda que la democracia se fortalece con una relación de colaboración transparente: *“la calidad de la democracia está ligada a la calidad de participación de la sociedad civil en los asuntos del Estado”*.

En síntesis, la relación con gobiernos autoritarios exige mantener la independencia, la crítica y denuncia, así como resistir retrocesos aprovechando espacios estratégicos de incidencia y, al mismo tiempo, resguardar a las organizaciones y a la ciudadanía frente a contextos hostiles.

7. ¿Deberían las organizaciones de la sociedad civil seguir participando en los espacios, comisiones o instancias políticas controladas por gobiernos poco comprometidos con la democracia y los principios del gobierno abierto?

En concordancia con lo anterior, se valora que la participación de la sociedad civil en espacios controlados por gobiernos poco democráticos debe evaluarse con atención y sensibilidad.

Beatriz señala la importancia de contextualizar y tomar decisiones estratégicas:

1. **Medir el impacto:** si permite influir en políticas o proteger derechos, puede ser útil participar, pero con condiciones claras (con transparencia, registros públicos, entre otras previsiones).
2. **Condicionar la presencia:** Exigir garantías de rendición de cuentas para evitar ser usados como pantalla.
3. **Retirarse si se legitima el régimen:** Si el espacio solo da apariencia de pluralismo sin efecto real, es mejor abandonarlo.
4. **Recordar el poder propio:** Las organizaciones también tienen legitimidad y capacidad de exigir, no solo de ceder.

Colombina coincide en la importancia de un análisis caso por caso: *“no se trata solo de estar presentes en una mesa de diálogo, sino de evaluar constantemente si esa presencia permite avanzar en los principios democráticos o si, por el contrario, contribuye a la normalización de prácticas contrarias a estos valores”*. Si no existe voluntad real, advierte, la alternativa es fortalecer la incidencia desde fuera de la instancia mediante denuncias, informes paralelos/sombras, organismos internacionales o incluso impulsando espacios alternativos de debate y participación.

Por su parte, Naida sostiene que la presencia de la sociedad civil es indispensable, aun en escenarios adversos: *“las organizaciones de la sociedad civil deben seguir participando, y con mucha más fuerza aún... hay que resistir antes de que esta situación avance a un punto casi sin retorno”*. Sin embargo, Juan Carlos es escéptico sobre la viabilidad de esta participación, al menos en su país: *“no... esos espacios ya no se conceden ni existe la apertura para hacerlo”*.

En conjunto, se reitera la importancia de no legitimar prácticas autoritarias; no facilitar la instrumentalización de las organizaciones por parte del poder; mantener la independencia y buscar la defensa del espacio cívico por medio de diversas estrategias bien analizadas según el contexto de cada país.

8. ¿Qué más podría hacer la sociedad civil para resistir el avance de estos gobiernos o medidas autoritarias y -por el contrario- promover la democracia?

Colombina subraya la articulación de la sociedad civil y la implementación de estrategias coordinadas, sostenidas y adaptadas a cada contexto, *“es importante la existencia de espacios de encuentro, conversación, escucha, aprendizaje y acción conjunta, tanto a nivel nacional como internacional, y buscando aliados en otros sectores como la academia, medios de comunicación y organismos internacionales”*. Para ello, resulta esencial la entrega de información clara, precisa y de calidad, la protección de la libertad de prensa, así como acordar mínimos democráticos comunes. Algunos de esos puntos básicos pueden incluir la probidad, la convivencia y el liderazgo que permitan construir alianzas amplias: *“... si estamos de acuerdo en ciertos mínimos de convivencia democrática, desde ahí podemos empezar a construir en conjunto en torno a desafíos específicos”*.

Esto es muy coherente con el criterio de Naida, quien enfatiza en la importancia de reforzar la articulación: *“Además de resistir y mantener viva la esperanza, hay que fortalecer las redes de apoyo entre las organizaciones tanto nacionales como regionales”*.

El trabajo territorializado también es crucial, tal y como lo expone Juan Carlos al decir que *“El trabajo en el interior del país es clave, sobre todo en países que tienen bajos niveles de educación y tampoco hay una cultura de transparencia y de velar por la democracia”*.

Finalmente, para resistir, Beatriz propone tres líneas concretas de acción: *“educación ciudadana mediante campañas sobre valores democráticos y participación; fortalecer alianzas con medios, academia, sector privado y actores internacionales para aislar a gobiernos autoritarios; y generar presión pública a través de movilización y acceso a la información para exigir transparencia y rendición de cuentas”*. Esperemos que estas y otras medidas le permitan a la región resistir el avance de proyectos autoritarios.

Entrevistas a profundidad

Para abrir el diálogo

En esta sección se presentan dos entrevistas que abordan temáticas claves para la incidencia ciudadana y su relación con las transformaciones más recientes en la política y las democracias contemporáneas. Tarick Gracida, cofundador y Director de Movilización y Comunicación en *Imaginarius*, nos sugiere cómo pasar del contenido al *storytelling* que moviliza; mientras que Thai Jungpanich, Directora de alianzas estratégicas en *Political Watch*, nos indica cómo diseñar tecnologías e inteligencia artificial bajo el control ciudadano.

Entrevista con Tarick Gracida



¿Cómo podríamos definir qué es una narrativa?

Hay mucha literatura alrededor flotando, y los términos a veces mutan de un autor al otro. A mí me gusta aterrizarlos de manera muy sencilla para que sea digerible y fácil de entender. Lo abordo en tres pequeñas partes: qué es contenido, narrativa, *storytelling*.

1. **Contenido.** Es información, solo eso. El contenido no busca generar emociones, ni relatar algo. Por ejemplo, el estado del clima, un listado de organizaciones, etc.

2. **Narrativa.** Es un relato de algo. Pero aun siendo un relato, no necesariamente cuenta una historia.

3. **Storytelling.** Es literal, del inglés *telling* que significa contar, y *story* que es historia. Se trata de contar historias. Alguna vez leí una regla básica; si al menos no hay un personaje y una historia, no es *storytelling*.

¿Cuáles son las principales características de la comunicación no tradicional y del storytelling?

Imagina una librería, en ella, las distintas secciones; arte, medicina, comunicación, etc. Se podría decir que cada sección de la librería es para los intereses y metas de distintas personas.

En *Imaginarius*, organización en la que soy director de Movilización y Comunicación, co-desarrollamos estrategias de comunicación no tradicional a su nicho junto a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, gobiernos nacionales, productoras de cine y organismos internacionales.

Nos salimos de la sección de medicina de la librería, por poner un ejemplo, y vamos a muchas más secciones. Co-planificando y co-implementando estrategias integrales online y offline con objetivos claros para audiencias muy pre-estudiadas, y acciones a medida de cada una de ellas.

Esta sumatoria de acciones y *storytelling*—basadas en evidencia desde otros sectores—no suelen ser estrategias tradicionales en el nicho de sociedad civil.

En su experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, ¿Cómo se han beneficiado estas agrupaciones de la comunicación tradicional y del storytelling?

En un trabajo que hicimos hace algunos años, levantamos una muestra sobre organizaciones de la sociedad civil, se encontraron 3 datos claves, que nos han permitido adaptar nuestro acompañamiento al ecosistema cívico.

El primero, es que más del 80% de las organizaciones de sociedad civil, piden ayuda no financiera en comunicación. Esto implica que hay una gran conciencia sobre la necesidad de mejorar. El segundo, es que 75% de ellas, en el proceso de armado de proyectos sí planifican destinar dinero al área de comunicación. Y el tercero, es que de ese 75%, la gran mayoría (9 de cada 10) destinaría los recursos a salarios. Es decir, alarmantemente solo un 4% destinaban dinero a la acción de comunicar *per se*.

Si bien hay muchísimas buenas estrategias dentro de las organizaciones, si en la última milla no se destina dinero al hecho de comunicar, lo más probable es que no se alcancen las metas definidas. Por tanto, se necesita invertir en comunicación, no solo se trata de comunicar por comunicar, ni de postear por postear en redes sociales, se trata de reconectar con las personas en este momento crítico para nuestras agendas.

De vuelta a la cuestión de las narrativas. ¿Cuáles son los principales retos que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales enfrentan para construir narrativas alternativas o nuevas?

El riesgo número 1, es la inflexibilidad: cuando una organización no se permite la apertura a replantarse el camino.

Esto afecta todos los niveles, desde generación de narrativas construidas para el nicho de personas ya convencidas de la causa, hasta el achicamiento del espacio cívico por la falta de conexión con la población. Se trata de reinventarse, no de cerrarse frente a las realidades cambiantes.

No se trata de juzgar a las personas por sus formas de pensar, sino de entender sus realidades. Solo así se pueden construir narrativas que impacten para lograr una re-conexión con la población.

¿Cuáles consejos les daría a las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales latinoamericanos que intentan construir o actualizar sus narrativas sociales y políticas?

Creo que se contesta en la pregunta anterior. Sólo sumaría dos cosas sencillas, pero que suelen costar trabajo lograrlas. La primera, es que los movimientos y organizaciones pierdan el miedo a experimentar, que jueguen, que se involucren desde todo el equipo. Y la segunda y más difícil, que no esperen a tener el producto perfecto, cerrado, final, increíble para experimentar. Se vale probar para iterar. Una vez dado el primer paso, todo fluirá más fácil e irá mejorando—siempre teniendo presente audiencias priorizadas con base en su capacidad de incidir en las metas.

En los últimos años, América Latina ha enfrentado el fortalecimiento de liderazgos y gobiernos con rasgos autoritarios. ¿Cómo las organizaciones de la sociedad y los movimientos sociales que defienden la democracia pueden enfrentarse a las narrativas autoritarias?

Hay tres puntos clave. Iré del más sencillo al más difícil.

El primero es invertir. El *storytelling* no debe ser visto como un accesorio, algo “bonito” de tener. Se debe implementar la cultura entera dentro de toda la organización, no solo en los equipos de comunicación. Hay muchos buenos ejemplos de cómo hacerlo.

El segundo, es elegir la batalla/causa. Comúnmente los líderes autoritarios usan narrativas que tocan las fibras emocionales de la población eligiendo entre 1 y 3 temas/agendas. Desde sociedad civil, suelen ser entre 10 y 15. Esta saturación típicamente genera rechazo en la población. Hay que elegir temas clave (pocos), y que, al construir las narrativas, no sean aburridas y/o demasiado técnicas.

El tercer punto, construir e implementar en colectivo. Los grupos anti derechos cada vez tienen más organización tanto en estructura, como en narrativas coordinadas. Desde el lado de la sociedad civil que defiende derechos humanos, la atomización de causas dificulta llegar a acuerdos e incluso emergen cancelaciones dentro del nicho mismo. Si bien existen casos excelentes, se necesitan muchos más. Y una vez implementados, se deben compartir los hallazgos.

Cada una de mis respuestas, en realidad es conocimiento colectivo. Por ejemplo, este año, desde *Imaginarius* estamos co-ideando con más de 60 organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, y productoras de cine en América Latina y estamos expandiendo el trabajo a África, Europa y Asia. Nos emociona mucho devolver al ecosistema aprendizajes y hallazgos. Nunca nos ha pasado que al pedir permiso a las organizaciones para compartir esta valiosa información nos devuelvan un “no”. Por el contrario, en algunos casos hemos visto nacer sinergias e incluso alianzas entre ellas.

¿Cómo desarmar o enfrentarse a las narrativas construidas por los liderazgos autoritarios si estos recurrentemente apelan a las fake news, cambian sus relatos según su conveniencia e incluso -en sus discursos- muchas veces han abandonado los criterios racionales de verdad?

En las respuestas anteriores, abordé algunos puntos. Sin embargo, hace falta subrayar que, dentro de una agenda, es difícil que una única narrativa general logre las metas deseadas. Las sociedades evolucionan, y con ello sus problemas y realidades. Las narrativas sociales no se deben de estancar, también necesitan evolucionar desde nuestro lado. Lo digital permite entender mejor a los distintos tipos de audiencias con una cantidad de información más rica que nunca antes, por ende, lo ideal dentro de una agenda es generar una sombrilla de varias narrativas coordinadas con base en el entendimiento profundo a cada una de las distintas audiencias meta; personas con distintas realidades.

Las personas pueden resistirse a la información real, pero no son inmunes, está comprobado. Sin embargo, no podemos hacer narrativas llenas solo de información, es aburrido hasta para las personas del nicho, debemos reconectar a través de las emocionalidades. Cierro con un consejo que promuevo desde hace muchos años y que funciona en muchos sectores; para hablar de (agenda social), hay que dejar de hablar de (agenda social). Necesitamos entender que las personas están cansadas y rechazan de entrada en su mayoría toda narrativa que represente un problema o conflicto, más aún cuando interfiere con sus creencias o su identidad como persona.

¿Cómo las agrupaciones sociales pueden mejorar sus narrativas sociopolíticas para emocionar a las personas, despertar afectos y que esto se traduzca en una mejor recepción y apoyo a sus proyectos?

En los últimos 3 años me ha tocado ver cómo muchas organizaciones han dejado de ver a sus equipos de comunicación como un área aislada, un silo. Este es un avance gigante, ya que permite un entendimiento compartido en toda la organización sobre el rol de la comunicación en el contexto actual. Una buena comunicación interna genera una buena comunicación externa.

Desde *Imaginarius* acompañamos a esos equipos, en acrecentar esa cultura interna y la cultura de *storytelling* a toda la organización. Y como parte de ello, por ejemplo, apostamos mucho por el uso de neurociencia del comportamiento, y el uso de herramientas digitales para levantamiento de información de las audiencias meta; incluidas sus emocionalidades frente a las agendas, sus límites frente a ellas y los mejores caminos narrativos para lograr movilización. Y en los casos donde los equipos de comunicación son pequeños, ya comenzamos a abordar el uso de agentes de inteligencia artificial para la implementación de las comunicaciones “institucionales”, lo cual permite a esos equipos, tener tiempo para pensar cómo mejorar sus narrativas apuntadas hacia fuera del nicho, es decir, comunicación no tradicional para audiencias aún no convencidas.

*Y dejo una pregunta en el
aire. Frente al contexto
de regresiones que
enfrentan las causas
sociales, ¿será momento
de replantearnos
nuestras propias reglas y
estructuras como
sociedad civil?*

Entrevista

con Thai Jungpanich



Vivimos en un momento en el que algunas democracias del mundo enfrentan riesgos, retrocesos o -al menos- problemas en cuanto a su funcionamiento y calidad. ¿Cuáles son los principales cambios que necesita el modelo de democracia actual?

Vivimos un momento crítico para las democracias, enfrentando desafíos como la erosión institucional, la desafección ciudadana, el aumento de las desigualdades y el auge de la extrema derecha. Ante este contexto, resulta esencial recuperar la capacidad colectiva de imaginar futuros democráticos centrados en el interés general y en la dignidad humana. Desde *Political Watch* defendemos que las democracias sólo pueden fortalecerse si se abren a una participación más inclusiva, integrando a actores sociales de ámbitos diversos como la justicia climática, la vivienda o los derechos laborales.

Necesitamos renovar nuestras instituciones, hacerlas vivas y accesibles, pero también necesitamos volver a confiar en que juntos podemos transformar lo que hoy parece imposible. Es urgente construir un movimiento global diverso, intergeneracional y plural que construya las democracias del futuro para contrarrestar a los nuevos poderes, como las grandes tecnológicas.

Debemos renovar nuestras instituciones para que se adapten a las nuevas realidades sociales, comunicar de forma más democrática —más accesible y con tangibles en la vida de las personas— y, sobre todo, volver a alimentar la esperanza en un futuro mejor. La esperanza y el amor, como motores de cambio, son esenciales para construir democracias y futuros deseables.

¿Cómo la tecnología y la inteligencia artificial han mejorado la democracia o podrían hacerlo? También en el sentido opuesto, ¿Cómo la tecnología y la inteligencia artificial han sido utilizadas (o podrían serlo) en beneficio de proyectos políticos autoritarios?

No creo en el tecnosolucionismo: la tecnología no puede resolver problemas políticos o sociales por sí sola, porque vivimos en sociedades humanas complejas, donde confluyen múltiples visiones, estructuras de poder y desigualdades. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) puede actuar como catalizador tanto para fortalecer procesos democráticos como para fomentar proyectos autoritarios.

Su impacto depende de cómo se diseña y se utiliza. Ya hemos visto su uso dañino en campañas de desinformación, manipulación de redes sociales o en operaciones militares, como en el caso del genocidio palestino, donde las grandes tecnológicas han proporcionado infraestructura y servicios que facilitan la vigilancia, la deshumanización y la represión. También en Europa vemos riesgos alarmantes, como en Hungría, donde se ha legalizado el uso de tecnologías de reconocimiento facial en tiempo real para vigilar y reprimir manifestaciones como el LGTBI *Pride*, vulnerando derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y de reunión.

Pese a estos riesgos, la IA podría ser una aliada si se utiliza de forma transparente, crítica y participativa, apoyando procesos como la deliberación ciudadana, mejorando la calidad de los debates públicos o abriendo nuevas oportunidades de participación más inclusiva. También puede ser clave en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, detectando la fragmentación irregular de contratos públicos o irregularidades en la contratación de personal. Pero para que estas potencialidades sirvan realmente a la democracia, es esencial democratizar el diseño y el control de la IA, involucrando a la ciudadanía y especialmente a las comunidades afectadas y evitando que su desarrollo quede en manos de grandes corporaciones.

¿Qué son las tecnologías cívicas y cómo han contribuido al desarrollo de proyectos y experiencias democráticas en los últimos años?

La tecnología cívica o *CivicTech* se refiere a aquellas herramientas tecnológicas, especialmente digitales, que facilitan la participación democrática y la relación entre ciudadanía e instituciones. No basta con que estén al servicio de la ciudadanía: para ser consideradas realmente cívicas, deben involucrarla en su diseño y desarrollo.

Surgidas tras la crisis financiera de 2008, en un contexto de desafección democrática y avance de Internet, las tecnologías cívicas buscaron mejorar la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana. En España, ejemplos como "Tu derecho a saber" o "Qué hacen los diputados" marcaron una primera etapa de efervescencia, seguida de una institucionalización con plataformas como Decidim en Barcelona o Consul en Madrid.

Actualmente, el ecosistema *CivicTech* atraviesa un momento de reflexión ante el avance de la inteligencia artificial, enfrentando nuevos retos en torno a la calidad democrática, la soberanía de los datos y la inclusión. Para avanzar, es crucial fomentar redes de colaboración horizontal, asegurar la sostenibilidad de los proyectos y reforzar el papel de la administración pública en su impulso. La magnitud del ecosistema es notable: solo en la *Civith Tech Filed Guide*, se registran más de 11.000 productos, de los cuales 350 son de código abierto, lo que demuestra el potencial transformador —y todavía en construcción— de la tecnología cívica.

En otros momentos ha definido la inteligencia artificial como el conjunto de procesos y tecnologías para que máquinas tomen decisiones, reproduzcan tareas y resuelvan problemas. Cómo hacer para que en un contexto donde las máquinas están aumentando su participación en la toma de decisiones, los seres humanos participen más y de forma más efectiva en los procesos políticos, las políticas públicas y en la resolución de problemas comunitarios?

La inteligencia artificial puede procesar datos, pero no puede captar la complejidad de las sociedades humanas. Nuestra vida social no cabe en un 1 o un 0: no existen fórmulas matemáticas ni recetas automáticas para legislar, convivir o resolver conflictos. Somos seres atravesados por múltiples realidades, circunstancias y emociones; no somos robots ni queremos homogeneizar nuestras sociedades.

La vida está llena de anomalías, imprevistos y matices que ninguna IA puede comprender del todo. ¿Por qué resignarnos a vivir en un mundo de blancos y negros cuando podemos vivir en un arcoíris? Por eso, la IA siempre debe estar al servicio de la sociedad, y debe ser estrictamente acotada, supervisada y controlada democráticamente.

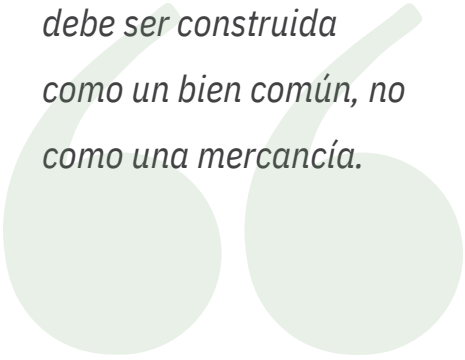
La tecnología no es neutral: refleja las decisiones, los intereses y los sesgos de quienes la diseñan y aplican. Para garantizar que la inteligencia artificial fortalezca y no debilite la participación ciudadana, necesitamos espacios de gobernanza participativa, transparencia algorítmica obligatoria, prohibiciones de decisiones automáticas en ámbitos sensibles, y una apuesta decidida por la educación crítica sobre tecnología. Iniciativas como la coalición_IA Ciudadana ya están impulsando esta visión de democratizar la IA a través de ampliar los espacios de participación de la sociedad en la regulación y en la gobernanza de la inteligencia artificial y los algoritmos, con el fin de conseguir que estas tecnologías promuevan la justicia social.

¿Cómo hacer que la inteligencia artificial esté al servicio de la ciudadanía y no se limite a los usos privados y lúdicos como la producción de imágenes de moda para subir a las redes sociales?

La inteligencia artificial debe ser construida como un bien común, no como una mercancía. Que algo sea tecnológicamente posible no significa que debamos aceptarlo automáticamente: la innovación no puede ser una excusa para debilitar derechos. No se trata de enfrentar innovación y regulación, sino de responder a una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de sociedad queremos construir? Democratizar la IA implica que sea accesible, equitativa, participativa y controlada socialmente. Esto requiere una regulación clara sobre cómo se entrena, dónde y para qué se aplica.

Para evitar que estas tecnologías profundicen las injusticias, es urgente avanzar hacia registros públicos de algoritmos que garanticen la transparencia, la gobernanza democrática y el respeto a los derechos humanos. Además, democratizar la inteligencia artificial implica mejorar y ampliar la participación pública en todas las fases: el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación de las políticas basadas en IA. Solo con una ciudadanía activa, crítica y deliberativa podremos asegurar que estas tecnologías respondan realmente a las necesidades colectivas y contribuyan a fortalecer nuestras democracias.

Para más información, visite
<https://civictech.guide/>
<https://iaciudadana.org/>



*La inteligencia artificial
debe ser construida
como un bien común, no
como una mercancía.*

Colaboradores(as)

Juan Pablo Sáenz Bonilla (Editor de Sinergias)

Candidato a Doctor en Ciencias Sociales y Políticas (Universidad Iberoamericana, México). Politólogo y Máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica donde trabaja como investigador y profesor. Investiga sobre procesos electorales, partidos, representación, subjetividades políticas y participación política de sectores evangélicos en Centroamérica. Actualmente es vicepresidente de ACCESA. juanpablo.saenz@accesa.org

Laura Astorga Monestel

Artista visual. Actualmente se dedica a la creación de su obra personal y colabora como ilustradora editorial para colectivos, organizaciones o personas que se dedican a la producción de contenido político-social. Ha colaborado para revistas independientes, universidades costarricenses (UNA, UCR, UCI) y también creando sus propias publicaciones. laurastorgam@gmail.com

Daniela Chacón Mendoza

Politóloga de la Universidad de Costa Rica con especializaciones en innovación y transformaciones sociales (Universidad de Barcelona) y metodología de investigación y estudios de opinión (Universidad de Lausanne). Trabaja como docente en la Universidad de Costa Rica e investigadora en el CIEP-UCR y el Programa Estado de la Nación. Es la presidenta de ACCESA y representante ante la Comisión Nacional de Estado Abierto. daniela.chacon.mendoza@accesa.org

Ana Sofía Ruiz Schmidt

Feminista, tejedora y mamá. Psicóloga con una maestría en Desarrollo Sostenible. Ha trabajado en organizaciones internacionales, de la sociedad civil, la academia y con activistas interesadas en el cambio social. Ahora trabaja con grupos en procesos internos para la toma de decisiones y planificación, cursa la maestría en psicología clínica y de salud. Coordina un espacio de encuentro alrededor del tejido como proceso grupal para la salud mental. anasofia@futuroslab.org

Jesús Bedoya Ureña

Doctor en Ciencia Social (Colegio de México) y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como asistente de investigación y docente en la Escuela de Sociología, así como investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales, ambos de la Universidad de Costa Rica. jbedoya@colmex.mx

Karen Estrada Romero

Doctorante en Investigación en Ciencias Sociales (FLACSO México). Maestra en Ciencia Política y Licenciada en Artes Plásticas Opción Diseño Gráfico. Se ha desempeñado como asistente de investigación del Observatorio de Reformas políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, docente en la Universidad de El Salvador e investigadora en Derechos Humanos en la Fundación Cristosal. kanenestrada@gmail.com

Yael Siman Druker

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. Es Profesora Investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Su último libro se titula Víctimas activistas en México: movilización social y política en medio de violencia extrema y desapariciones, publicado en 2024 por Lexington Books.

María Camila Moncada Guevara

Politóloga por la Universidad Nacional (Colombia), Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de los Andes y Candidata a Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana (México). Ha trabajado como docente universitaria, investigadora y consultora. Investiga sobre movimientos sociales feministas, los conflictos por el reconocimiento de derechos sexuales y las culturas políticas de los activismos neoconservadores. mcmoncadag@uniandes.edu.co

Adrián Vergara Heidke

Profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, donde también se desempeña como director del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Obtuvo sus títulos en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Bremen, Alemania. Sus áreas de especialidad son los estudios del discurso, la pragmática, la comunicación multimodal y la producción y comprensión textual. adrian.vergara@ucr.ac.cr

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Educador popular con estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente coordina el Observatorio de Bienes Comunes del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Procura impulsar procesos de reflexión y participativos desde diversos espacios e instancias. luis.sanabrizaniboni@ucr.ac.cr

Argerie Sánchez Mena

Máster en Gestión de proyectos de impacto social (Universidad de Salamanca) y licenciada en Comunicación Estratégica por la Universidad de Costa Rica. Es Coordinadora del Proyecto Juventudes Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert (América Central) y encargada del Programa Agentes de Cambio. Ha participado en el movimiento estudiantil, política partidaria y también en organizaciones comunales y colectivos feministas. argesanchezmena@gmail.com

Roberto Jaén Chacón

Cineasta (Escuela Internacional de Cine y T.V. de Cuba), politólogo y Máster en Comunicación por la Universidad de Costa Rica. Ha dirigido, producido y escrito publicidad, video institucional, televisión, formatos web y cortometraje. Actualmente, es docente en la UCR y curador del programa Preámbulo de Cinemateca del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, al tiempo que desarrolla largometrajes como productor y director. robertojaenchacon@gmail.com

Catalina Morales López

Trabajadora Social y Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado en diversas funciones dentro del sector público, incluyendo asesoría técnica, coordinación interinstitucional y docencia universitaria. Ha brindado acompañamiento técnico a organizaciones de sociedad civil en procesos de formación, coordinación y fortalecimiento institucional. catamorales10@gmail.com

Colombina Schaeffer

Directora Ejecutiva en Ciudadanía Inteligente (América Latina) e integrante del directorio de People Powered. Es socióloga con doctorado en ciencia política (Universidad de Sydney). Tiene experiencia en la academia y la sociedad civil en temáticas relativas a la democracia, participación ciudadana, ecología política, movimientos sociales y estudios de la ciencia y la tecnología. cschaeffer@ciudadanointeligente.org

Thai Jungpanich

Ingeniera técnica industrial con posgrados en tecnopolítica y derechos en la era digital, aplicaciones de la tecnología al desarrollo humano y liderazgo e innovación social por ESADE. Es especialista en análisis de políticas públicas por la London School of Economics and Political Science. Tiene experiencia en organizaciones sociales, filantropía política y activismo social. Actualmente es Directora de alianzas estratégicas en Political Watch. thai.jungpanich@politicalwatch.es

Tarick Gracida

Especialista en comunicación y publicidad con amplia experiencia en el sector privado, público, sector social y de organismos internacionales. Se formó en narrativa pública (Harvard) y storytelling de impacto social (Georgetown). Es Cofundador y Director de Movilización y Comunicación en Imaginarius. Se dedica a apoyar a organizaciones y productoras de cine en estrategias no tradicionales para salir del nicho, storytelling y narrativas basadas en neurociencia. @TarickGracida

Juan Carlos Aguilar Moncada

Abogado con un doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global y un máster en Estrategias Anticorrupción (Universidad de Salamanca). Ha trabajado como consultor en independencia judicial y selección de funcionarios, así como oficial jurídico en el centro de Asistencia Legal Anticorrupción de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y analista en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Actualmente, dirige el área de Democracia y Transparencia de la ASJ en Honduras.

Beatriz Helena Gil

Politóloga con Maestría en Ciencia Política (Universidad de Los Andes). Tiene experiencia laboral en temas relacionados con el Congreso, como asesora en una Unidad de Trabajo Legislativo en la Cámara de Representantes e investigadora en el Centro de Apoyo Académico al Legislativo y en el Programa Congreso Visible, ambos adscritos al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. bgil@congresovisible.org

Naida Romero

Formación en Psicología y amplia experiencia en gestión pública, proyectos sociales, transparencia, asistencia humanitaria y coordinación e iniciativas de fortalecimiento ciudadano e institucional. nromero@semillas.org.py

Fin

